

EXILIO NOBILIARIO Y PODER VIRREINAL:  
CLIENTELISMO POLÍTICO  
EN LOS PRESIDIOS ESPAÑOLES DE ARGELIA.

Beatriz Alonso Acero  
Miguel Ángel de Bunes Ibarra  
C.E.H. - C.S.I.C

1. *Poder real y sistemas de Corte en la España moderna: el modelo norteafricano.*

La expansión de los reinos hispanos más allá de las estrictas fronteras peninsulares desde los siglos del Medioevo conlleva la necesidad de articular formas políticas de gobierno y representación de la autoridad real en los territorios que se van incorporando a cada Corona. Bien se trate de dominios patrimoniales, bien de tierras ganadas por las armas, se hace necesaria la creación de cargos que trasladen a dichos territorios los principios y presupuestos básicos en torno a los cuales se ha constituido y se rige esta autoridad regia, establecida como poder central. En este sentido, la figura del virrey, del gobernador y, en ocasiones, la del regente, encarna esta fundamental tarea de representación del poder real. Sin embargo, conforme la expansión territorial de las Coronas de Aragón y Castilla se amplía, las diferencias y particularidades sobre el modelo básico se hacen más notables.

Las circunstancias y épocas concretas en las que enclaves de Italia, del norte de África o de Ultramar se incorporan a las coronas peninsulares establecen especificidades dignas de mención. En el caso italiano, y como demuestran los recientes estudios de M. Rivero y de A. Álvarez-Ossorio<sup>1</sup> la figura del virrey como *alter ego* del monarca, presente hasta el final del reinado de Carlos V, da paso a un nuevo modelo en el que el virrey se convierte en mero primer ministro en el territorio al frente del cual se le coloca. El paso de una corte itinerante a otra fija o, al menos, sedentaria, supone que el monarca ya no va a estar ausente de sus dominios de manera temporal, sino permanente, lo que da paso a un proceso de centralización y concentración de la autoridad real en el que se reduce la autonomía de virreyes y gobernadores en favor del poder de instituciones y consejos. Así, la creación del Consejo de Italia en 1555 supone la dirección de los asuntos concernientes a estos territorios desde la propia Corte, manteniendo el virrey sus poderes relativos a hacer cumplir en su territorio las decisiones que en Madrid se adoptan, siendo además vigilada estrechamente su labor a través del recurso al mecanismo de la visita, en cuanto se advierten irregularidades o se sospecha que pudiera haberlas.

El caso norteafricano ofrece especificidades propias, derivadas de las circunstancias que marcan la anexión de estos territorios a la Corona de Castilla en los últimos años del siglo XV y primera década del Quinientos. La limitación del espacio que se conquista, reducido en la gran mayoría de las ocasiones al enclave costero y sólo unos pocos kilómetros más hacia el interior<sup>2</sup> y, sobre todo, la presencia del Islam en el norte de África, impiden unas

<sup>1</sup> M. RIVERO., *Felipe II y el gobierno de Italia*, Madrid, 1998; A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO., *Milán y el legado de Felipe II: gobernadores y corte provincial en la Lombardía de los Austrias*, Madrid, 2001.

<sup>2</sup> La entrada de España, como anteriormente de Portugal, en los territorios norteafricanos parte de una forma de ocupación restringida del espacio mediante la cual se toman enclaves costeros estratégicamente situados, pero sin avanzar nunca hacia el interior. Como resultado de este tipo de ocupación, claro remedo de las formas de avance contra el musulmán en la Península Ibérica, estos enclaves dominarán un escaso alfoz y quedarán aislados del entorno. Sobre este tema, R. RICARD., "Le problème de l'occupation restreinte dans

fórmulas de representación real idénticas a las de los territorios italianos, así como una evolución semejante del ejercicio del poder real. La presencia de España en el norte de África se articula en presidios, enclaves guarnecidos desde los que se pretende ejercer un dominio sobre el enemigo al tiempo que se ofrece una protección sobre la población cristiana. Estos presidios no son sino un reflejo fiel de la idea con la que se cruza el Estrecho tras la toma de Granada en 1492: continuar la lucha frente al Islam en los territorios que un día habían formado parte de la Hispania visigoda. Desde estos presidios se llevaría a cabo la expansión de la Cristiandad por el norte de África, apuntalando el poderío externo de la recién estrenada Unión de Reinos (1469) y controlando el devastador auge del corso berberisco en las aguas del Mediterráneo. Según estas premisas, lo que los territorios norteafricanos anexionados a la Corona de Castilla representan es una avanzadilla cristiana frente al Islam en terreno hostil. La lucha contra el musulmán, que desde siglos atrás ha configurado y mediatizado las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales de los reinos hispánicos, se perpetúa en los albores de la Edad Moderna como uno de los elementos definidores de la nueva monarquía<sup>3</sup>.

Por la confluencia de todas estas circunstancias, en estos presidios norteafricanos, a diferencia de las ciudades italianas, la autoridad del monarca y el ejercicio de su poder a través de un representante adquieren unos tintes bien diferentes. Por un lado, la insegura posición en la que quedan instaladas estas guarniciones —y la población civil a la que se anima a establecerse en estas plazas a través de cartas de poblamiento— obligan a una vigilancia constante de las formas y métodos a través de las cuales se ejerce la autoridad real. La situación de permanencia de la lucha frente al Islam desde estos enclaves determina que los asuntos políticos y militares de estas plazas sean controlados por el Consejo de Guerra, ya presente en la España de Carlos V, por lo que la evolución que señalábamos para Italia de virrey como *alter ego* del monarca a virrey como primer ministro a partir del reinado de Felipe II es inexistente para los presidios norteafricanos.

Pero, por otro lado y de forma paralela, se da un proceso de “alejamiento” de la Corte española respecto de sus posesiones en Berbería. Las causas de esta evolución habría que buscarlas en el carácter de empresa fracasada con que el pronto se tilda a la expansión castellana por el norte de África, frente a las expectativas que siguen generando los territorios italianos de la Corona de Aragón y, sobre todo, las nuevas tierras descubiertas al otro lado del Atlántico. En efecto, una conquista que ha sido preparada y gestada para mayor gloria de la Cristiandad, sin desdeñar efectos prácticos de primera magnitud como la señalada lucha contra el corso, se convierte en muy pocos años en una tiniebla que apenas reporta algunos beneficios para España a cambio de una sangría humana y económica de considerables dimensiones. El norte de África es, a la vez, sueño y pesadilla para los monarcas cristianos que quieren acaudillar a la Cristiandad contra el Islam y para la nobleza que aún sigue consiguiendo honor, fama y ascenso político y social luchando contra el infiel. Los grandes costes del mantenimiento de esta aventura africana pesan mucho a las cada vez más maltrechas

---

l'Afrique du Nord (XV-XVIII siècles)", *Annales Economies, Sociétés, Civilisations*, núm. 8 (1936) pp. 426-437; ibidem., "Les établissements européens en Afrique du Nord du XV<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle et la politique d'occupation restreinte", *Revue Africaine*, vol. 79 (1936) pp. 687-688; F. BRAUDEL., "Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 à 1577", *Revue Africaine*, vol. 69 (1928) pp. 184-233 y 351-410. Traducción española en F. BRAUDEL., *En torno al Mediterráneo*, Barcelona, 1996, pp. 41-100.

<sup>3</sup> M. Á. de BUNES IBARRA., "La presencia española en el Norte de África: las diversas justificaciones de las conquistas en el Magreb", en *Estudios sobre la presencia española en el norte de África*, Melilla, s.a. pp. 13-34; ibidem., "El descubrimiento de América y la conquista del Norte de África: dos empresas paralelas en el siglo XVI", *Revista de Indias*, 175 (1985), pp. 225-235.

arcas de una monarquía que ha de desenvolverse en muchos frentes territoriales a la vez y que acabará volviendo sus ojos hacia sus espáñoles en Berbería tan sólo cuando el resto de circunstancias políticas de Europa lo permitan.

A tenor de estas circunstancias, durante el tiempo en que España mantiene sus posesiones al otro lado del Estrecho es factible comprobar la presencia de los mecanismos propios de la autoridad central trasladados allende el Mediterráneo. Pero también es cierto que por las características específicas que tienen estos presidios norteafricanos, por su situación, por su evolución y por el papel que desempeñaron en el conjunto de la Monarquía, vieron favorecida la aparición de situaciones que mimetizaron los rasgos y caracteres definidores de la Corte española, desde 1561 asentada en Madrid. En concreto, analizaremos el caso de Orán, presidio español por excelencia en el norte de África y que llegó a ser conocido en el siglo XVII con el significativo apelativo de "Corte Chica".

## *2. La representación del poder real en Orán*

Orán fue el único enclave de todos los conquistados por Castilla en el norte de África entre 1497 y 1510 en el que los Reyes Católicos y, en especial, Fernando, tras la muerte de Isabel en 1504, intentaron trasladar, de una manera firme y eficaz, los presupuestos de organización política, social, administrativa y religiosa vigentes en la Castilla de ese periodo, combinando los rasgos propios de una urbe en transición a los nuevos tiempos modernos con los que definen a un enclave de carácter militar localizado en la frontera norteafricana. Orán y su cercano y magnífico puerto, Mazalquivir, doble presidio en realidad dada su proximidad, se configuran desde el primer momento como abanderados de la presencia española en Berbería. Pero Orán trasciende los límites del simple presidio, entendido como plaza fortificada defendida por una guarnición, para convertirse en auténtica ciudad, en la que se mezclan elementos medievales y modernos, y donde se ensayan fórmulas sociales, económicas y administrativas que luego tendrán fiel reflejo en la vida de las ciudades de la Península, de la misma forma que en esta urbe española de Berbería se reflejan procesos, actitudes y comportamientos que aparecen en las ciudades peninsulares de la época. Es necesario, por tanto, desechar la idea de que en el norte de África sólo existían fortalezas aisladas acechadas por el enemigo: enclaves que en un principio fueron concebidos como plazas defensivas acaban sobrepasando los límites de la lucha frente al Islam y desarrollan formas de vida muy semejantes a las que hay en otros lugares de la España moderna.

Tras la conquista de Orán en 1509, la Corona confió su gobierno a un miembro de la nobleza de armas, concertándose un asiento entre ambos para la guardia y tenencia de la plaza, en el que se especificaba la cantidad de gente de guerra que serviría en ella y su composición, la forma de abastecimiento, y las cantidades destinadas por la Corona para su mantenimiento. En Orán la primera tenencia fue entregada al alcalde de los Donceles, don Diego Fernández de Córdoba que llevaba desempeñando el cargo de alcalde de Mazalquivir desde su conquista en 1505, en la que había participado como cabeza visible. Dentro de la nobleza, la Corona siempre eligió a sus representantes en Orán-Mazalquivir entre quienes hubieran tenido un adiestramiento militar más completo, desempeñando funciones de este calibre en la guerra de Granada, en otras latitudes de la Monarquía o incluso en la propia Berbería. El Consejo de Guerra confeccionaba la lista de nobles que apetecían este cargo y eran aptos para él, opinando sobre sus preferencias, y la hacía llegar al monarca, a quien competía la única y definitiva elección, en la que además de la experiencia en el ejercicio de las armas también jugará un papel importante los apoyos que desde dentro de la Corte pudiera conseguir el noble que aspiraba al cargo.

Una vez que se ha procedido a la elección del nuevo "Capitán general de los reinos de Tremecén y Túnez y gobernador de las plazas de Orán y Mazalquivir", se le concederá el correspondiente título, en el que el gobernador recibe plenos poderes para ejercer sus funciones como alcalde y tenedor de Orán y su alcazaba y de la villa y fortaleza de Mazalquivir y se especifica el salario que recibirá por realizarlas<sup>4</sup>. El gobernador recibía 3.630 maravedíes diarios como sustento base, a los que se añadían otros 550.000 maravedíes anuales por el cargo de gobernador. De ellos, 300.000 procedían de la tenencia de Orán, de su alcazaba y del castillo de Rosalcázar, y los otros 250.000 por la tenencia de Mazalquivir. El total asciende a 1.874.950 maravedíes al año -5.136 diarios- o, lo que es lo mismo, 5.000 ducados anuales, siempre en el caso de que se tratase de un gobernador que desempeñase su cargo en propiedad, caso muy distinto a si lo hacía en interinidad, en ausencia del titular. Junto al título, al gobernador se le otorgan las instrucciones que habrá de seguir en el desempeño de su cargo, normas que se presentan cada vez más estrictas y meticulosas conforme avanza el siglo XVI y aún más en el XVII, a tenor de los abusos que se producen en cumplimiento de sus funciones<sup>5</sup>. En la "Instrucción para el cargo de capitán general" se especifican todas las tareas que debe realizar en cuanto desembarque en las plazas norteafricanas que va a gobernar. A él compete todo lo relativo a la guerra y a la guarnición que sirve con las armas al rey en estas plazas, el nombramiento de oficiales, la vigilancia y reparo de las fortificaciones, el mantenimiento de estrechas relaciones con los musulmanes que colaboran con los españoles, y el cuidado de la minoría judía que vive en Orán, entre otras muchas cuestiones a las que deberá atenderse para no ser juzgado por desacato a la autoridad real o por cualquier otra irregularidad cometida, en el transcurso del juicio de residencia al que se someterá una vez haya finalizado su labor al frente del gobierno de las plazas<sup>6</sup>. Nada más llegar a las plazas y como acto en el transcurso del cual toma posesión efectiva del cargo que va a desempeñar, se procede a la ceremonia del pleito-homenaje, en la cual el nuevo gobernador jura su cargo ante su predecesor y recibe las llaves de la ciudad de Orán y de la villa de Mazalquivir y de sus fortalezas y castillos. Este acto, rodeado de todo un aparato ceremonial que recoge muy de cerca tradiciones cortesanas medievales, es descrito con detalle por Diego Suárez Montañés, soldado en la plaza de Orán durante casi treinta años, en referencia al inicio del gobierno de D. Pedro Galcerán de Borja, último Maestre de la orden de Montesa, marqués de Navarres, que fue gobernador del doble presidio entre 1567 y 1571:

*"Y, teniendo el dicho señor Maestre de Montesa las manos plegadas, juntas la una con la otra, entre las manos del dicho señor don Luis Fajardo, dijo que hacía juramento y pleito homenaje como caballero hijodalgo, una, dos e tres veces; una dos e tres veces; una, dos e tres veces, según fuero e costumbre de España. Que, entregándosele la dicha ciudad de Orán y su alcazaba y fortaleza de Araz el Cazar, y la dicha fortaleza de Mazalquivir, como su Majestad manda, las tendrá por su mandado y por su corona real como su alcaide, bien y fielmente y llanamente y para su servicio, así en guerra como en paz. Guardará sus mandamientos, y acudirá con las dichas fuerzas, cada y*

<sup>4</sup> Para un modelo de título, véase el traslado del otorgado a D. Pedro Luis Galcerán de Borja, en AGS. GA. Leg. 71, fol. 150. A pesar de la pomposidad del título, el gobernador obtenía sus poderes sobre los presidios de Orán y Mazalquivir y su alfoz, cifrado en poco más de unas decenas de kilómetros cuadrados en torno al doble presidio. Nótese la diferencia en las denominaciones de Orán, desde el principio con categoría de ciudad, y de Mazalquivir, que es sólo villa.

<sup>5</sup> Un buen modelo de instrucciones son las que recibe el propio Maestre de Montesa, en AGS. GA. Leg. 71, fol. 151.

<sup>6</sup> Para un estudio sobre la figura del gobernador en la ciudad de Orán, vid. J. CAZENAVE, "Les gouverneurs d'Oran pendant l'occupation espagnole de cette ville (1509-1792)", *Revue Africaine*, vol. 71 (1930), pp. 257-299.

*cuándo y a quién, como por su Majestad le fuere mandado, airado o pagado llanamente, sin réplica alguna, y no las dará ni entregará si no fuere a su Majestad o a su cierto mandado, y hará todo aquello que bueno y leal alcaide debe y es obligado hacer, so pena de caer en mal caso y en las otras penas en derecho establecidas contra los alcaides que quebrantan las fes y pleito [de] homenajes que hacen por castillos y fuerzas, en la fidelidad que deben a sus reyes y señores. Y, para ello, dijo que obligaba y obligó su persona y bienes habidos y por haber en forma”<sup>7</sup>.*

Junto a esta ceremonia, la llegada del nuevo gobernador a las plazas, acompañado de su familia, sus criados y de otros nobles próximos a su persona, es saludada con fiestas y recepciones en conmemoración del inicio de un nuevo gobierno que se espera y desea de gran prosperidad para los habitantes civiles y militares de las dos plazas, en particular, y para el mantenimiento de una posición cristiana clave en esta Berbería de dominio musulmán, en general.

Tras una primera inspección de los castillos y recinto fortificado en el que a partir de ahora y hasta que sea relevado desempeñará su labor, el gobernador empieza a ejercer de una forma práctica el cargo que le otorga la máxima autoridad sobre Orán y Mazalquivir. En este sentido, se aprecia una evidente evolución hacia un poder omnímodo por parte del gobernador pues, si ya desde los primeros años tras la conquista de estas dos plazas reúne una gran cantidad de responsabilidades y competencias, en muy poco tiempo pasará a concentrar en su persona atribuciones que, en un principio, desempeñaban otras figuras administrativas del doble presidio. Si desde el primer momento había acumulado plenos poderes como capitán general y como gobernador, a partir de 1534 también desempeñará todas las atribuciones relativas a la labor judicial, tanto civil como criminal. Es en esta fecha cuando la Corona suprime la figura del corregidor que, nombrado por el rey también de entre la nobleza, en este caso titulada, había realizado las tareas referentes a la jurisdicción y administración propiamente dichas de Orán y Mazalquivir. Con su bastón blanco, símbolo de poder, el corregidor había mantenido un papel prioritario en el abastecimiento de las plazas, procesos judiciales de la población, relaciones con los musulmanes, manteniendo siempre una comunicación directa con la Corte, a la que enviaba continuos avisos de lo que ocurría en el interior de las plazas y de la que recibía instrucciones para él y para el propio gobernador. En alguna medida, el corregidor había acabado siendo la figura a la que la población de las plazas recurría en primera instancia, porque veía en ella al magistrado gestor de sus asuntos cotidianos, frente a un gobernador más interesado en conseguir hazañas militares que abrlantasen aún más su ya laureado blasón. De aquí al enfrentamiento personal entre gobernador y corregidor no mediará más que un paso: el marqués de Comares, don Luis Fernández de Córdoba, gobernador de Orán y Mazalquivir desde 1518, pide ser relevado de sus funciones en 1534, ante sus continuos choques con el corregidor Melgarejo. Su sustituto al

<sup>7</sup> D. SUÁREZ MONTAÑÉS., *Historia del Maestre último que fue de Montesa y de su hermano don Felipe de Borja, la manera cómo gobernó Orán y Mazalquivir ...*, siendo allí capitanes generales. Madrid, 1889, parte I, cap. VIII, pp. 140-142. Esta edición sólo contiene los treinta primeros capítulos del manuscrito, redactado por un asturiano que sirvió con las armas en Orán entre 1577 y 1604. Al presente se halla en prensa la edición completa del manuscrito, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, a cargo de M. A. de Bunes Ibarra y B. Alonso Acero. De manera inusual, este pleito-homenaje se llevó a cabo en la Corte de Madrid y no a la llegada a Orán del nuevo gobernador, algo que Diego Suárez no ve con buenos ojos: “En que es gran cosa y tiene mucha fuerza, en el real servicio, que los capitanes generales y alcaides de castillos y fortalezas hagan el pleito homenaje dentro de ellas cuando se les entregan, y de que se hacen cargo. Porque, si después el enemigo les necesitare con calamidad de sitios y les convidare con tratos, se acuerden del pleito homenaje y juramento, y otras obligaciones que dentro de los tales castillos y alcázares tienen hecho, en su guarda y seguridad”. (D. SUÁREZ MONTAÑÉS., *Historia del Maestre último ...*, parte I, cap. VIII, pp. 143-144).

frente del gobierno de las plazas, don Martín de Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete, exige como condición antes de aceptar su cargo la supresión de la figura del corregidor nombrado directamente por la Corona. Al concedérselo Carlos V, el conde de Alcaudete reunirá en sus manos la máxima autoridad civil, militar y judicial de las plazas.

A partir de este momento, el gobernador de Orán-Mazalquivir se convierte en una figura que detenta un poder casi absoluto en Orán. Aunque su cargo esté sujeto a juicio de residencia y a pesar de que en el transcurso del ejercicio del mismo esté obligado a informar de manera continuada a la Corona de todo lo que acaece en las plazas, los abusos de poder no tardarán en aparecer, precisamente porque desde España se han perdido parte de los mecanismos que controlaban en alguna medida la labor del gobernador desde dentro de las propias plazas. Además, en la Corte funcionan bien las influencias de estos nobles a través de sus propias redes familiares, en las que sus parientes que quedan en Valladolid, Toledo o Madrid defienden ante el monarca a capa y espada la labor de estos gobernadores en las plazas a las que han sido destinados, cuando no son ellos mismos los que obtienen una licencia para presentarse ante el rey e informar favorablemente de su gobierno. Todo esto se ve propiciado por el hecho de que este cargo de gobernador de Orán y Mazalquivir estuvo durante casi todo el siglo XVI en manos de la familia de los Fernández de Córdoba en sus distintas ramas, lo cual demuestra que cuando un linaje nobiliario accedía a este cargo, intentaba conservarlo en sus manos de generación en generación, en virtud de las preeminencias que su cumplimiento llevaba consigo. Así, al primer gobernador de Orán-Mazalquivir, don Diego Fernández de Córdona, I marqués de Comares (1509-1518), le sucede su hijo, don Luis Fernández de Córdoba (1518-1534). El siguiente gobernador es don Martín de Córdoba y Velasco (1534-1558), I conde de Alcaudete y yerno del anterior. Tras su muerte en la infructuosa batalla de Mostaganem, es sucedido por su hijo Alonso de Córdoba y Velasco, II conde de Alcaudete (1558-1564); a finales de siglo de nuevo vuelve este linaje al poder, con don Diego Fernández de Córdoba, III marqués de Comares (1589-1594) y don Francisco de Córdoba y Velasco (1596-1604), III conde de Alcaudete<sup>8</sup>.

Tras la salida de las plazas de don Francisco de Córdoba y Velasco en 1604, se abre una etapa en la que quienes desempeñan este cargo ya no pertenecen a una misma familia. Los gobernadores de Orán y Mazalquivir se encontrarán en las décadas siguientes en las casas de los Guzmán, de los Arellano, de los Cárdenas, de los Andía y de los Dávila. En este cambio tan significativo que se produce a comienzos del siglo XVII cuando, después de casi un siglo de haber desempeñado la gobernación del doble presidio personas pertenecientes al linaje de los Córdoba, ya no vuelve a elegirse a ninguno de sus miembros para el cargo hasta la segunda ocupación española de las plazas, entre 1732 y 1792, parece fundamental la llegada al trono de Felipe III y toda su cohorte de consejeros, que decidirían imprimir un cambio en la procedencia de los gobernadores de estas plazas, máxime teniendo en cuenta la polémica labor realizada por el último gobernador de la familia de los Córdoba, D. Francisco de Córdoba y Velasco, quien será acusado de enriquecimiento ilícito a través de su participación directa en las sacas de grano comprado a los musulmanes del entorno de Orán<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> El período de este siglo en que los Córdoba no están al frente de las plazas es el comprendido entre 1564 y 1573, momento en que el puesto de gobernador recae en Andrés Ponce de León (julio 1564-noviembre 1565), Hernán Tello (noviembre 1565-julio 1567), Pedro Luis Galcerán de Borja, el último maestre de Montesa, cuya gobernación describe con tanto detalle D. Suárez Montañés (julio 1567-noviembre 1571), y Felipe de Borja, hermano del anterior (noviembre 1571-marzo 1573). Entre 1594 y 1596, el cargo fue desempeñado, aunque en interinidad, por D. Gabriel Niño de Zúñiga, que tampoco pertenecía a esta casa nobiliaria.

<sup>9</sup> Sobre lo ocurrido durante este gobierno, B. ALONSO ACERO, *Orán y Mazalquivir, 1589-1639: una sociedad española en la frontera de Berbería*, Madrid, 2000, pp. 366-377.

Aun así, la forma de proceder del gobernador dentro de la plaza no variará por haber cambiado el linaje predominante en el desempeño del cargo: situaciones de nepotismo y clientelismo se perpetúan en un siglo XVII en el que las dificultades por las que atraviesa el doble presidio se acrecientan a tenor de los problemas económicos y financieros de la Monarquía. Así, ante su inminente muerte, don Juan Ramírez de Guzmán, marqués de Ardales, gobernador entre 1604 y 1607, deja al frente de las plazas a su hijo, don Diego de Toledo, en calidad de interino; cuando a don Jorge de Cárdenas Manrique, duque de Maqueda, gobernador desde 1616 a 1622, se le concede un permiso para venir a España, deja al frente de los asuntos de Orán y Mazalquivir a su hermano don Juan Manrique de Cárdenas.

Pero además del control del cargo en manos de una misma familia durante varias décadas, lo que hay que tener en cuenta son las redes familiares que se establecen en el doble presidio en torno a quien desempeña las funciones gubernativas en un momento dado. Si en la cúspide de la autoridad se sitúa el gobernador, a su alrededor se colocan numerosos parientes que realizan tareas igualmente relevantes para la administración del presidio y ellos están presentes en los momentos más relevantes para la vida de las plazas. De esta forma, el capitán general acaba identificando su gobierno con el enclave al frente del cual se sitúa, del que se siente cabeza visible y máximo responsable, dependiendo de él todo lo que se hace y deshace a lo largo de su mandato y sirviéndose de personas muy cercanas, pertenecientes a su familia, para desarrollar todas las facetas de su gobierno. Si a ello unimos la presencia en España de otras vertientes de la misma red familiar, actuando de forma permanente ante la Corte en pro y beneficio del gobernador, se entiende la estrecha imbricación entre presidio y Península a través de la figura del capitán general y su linaje, y hasta qué punto el ejercicio de este cargo al otro lado del Estrecho no suponía sino una magnífica oportunidad para apuntalar el prestigio y ascenso de un linaje nobiliario ante los ojos de la Corona<sup>10</sup>.

Junto a esas redes familiares que crea el gobernador en Orán y que perpetúa cuando su linaje obtiene este cargo de forma sucesiva, la máxima autoridad de este doble presidio entra en contacto en esos enclaves con otra nobleza de corte militar que ha acudido a las plazas desde su conquista y que ahora ocupa los principales puestos de la administración civil y militar. Se trata de un nutrido grupo de familias, castellanas y andaluzas en su mayoría, entre las que destacan los Angulo, Córdoba, Sotomayor, Daza, Jiménez, Navarrete, Rejón de Silva, Zufre y Ramírez de Arellano. Entre los miembros de estos linajes, que ocuparon los asientos de regidores en el cabildo de Orán, así como los oficios militares de alféreces, capitanes, alcaldes, sargentos mayores, contadores y veedores, se observa una marcada endogamia que se rompe en ocasiones para emparentar con los familiares de los diversos gobernadores. De esta manera la alta y la baja nobleza presente en Orán y Mazalquivir iban afianzando sus vínculos y poder con el paso del tiempo. Desde mediados del Seiscientos, los servicios en África de estas familias fueron recompensados con numerosos hábitos militares, y la lealtad de dos de ellas, los Ramírez de Arellano y los Angulo, a Felipe V, se premió con la concesión respectiva de los títulos de marqueses de Arellano y de Angulo.

<sup>10</sup> Como refiere J-F. Schaub en relación con el gobierno de don Martín de Córdoba, conde de Alcaudete, su familia "actúa permanentemente siguiendo tres escalas, la local -Orán y su entorno-, la regional -las zonas de Castilla y Valencia involucradas con la movilización de recursos y bastimentos destinados al presidio, así como el entorno magrebí sea cristiano o no-, la imperial -hacia los centros de poder y adonde esté el Emperador-. Si pudiéramos, parece que es factible, establecer la cronología de los viajes de los miembros de la parentela en esos espacios, veríamos hasta qué punto las prácticas de aquellos personajes pudieron favorecer la integración regional del complejo Orán-Mazalquivir hacia el espacio peninsular". J-F. SCHAUB, "El lado oscuro de la epopeya: la visita al conde de Alcaudete", *Congreso Internacional Carlos V. Europeísmo y Universalidad*, Granada, 2001, vol. III, p. 446.

Tras la desaparición de la figura del corregidor en 1534 tan sólo los oficiales del sueldo podrán ejercer desde dentro en alguna medida el control a la figura del gobernador que desde fuera parece tambalearse cada vez de forma más evidente. Nombrados también por el rey, y extraídos frecuentemente de las filas de la nobleza, el veedor, el contador y el pagador actúan en relación directa con la guarnición de Orán y Mazalquivir, a la que cuantifican, pagan y vigilan, pero de su presencia en las plazas también se deduce un seguimiento de la labor del gobernador de la que informarán a la Corona y consejos pertinentes. En las relaciones entre el gobernador y estos oficiales reales de Orán y Mazalquivir, aunque la sumisión y obediencia que éstos debían prestar al capitán general y gobernador era exigida por la propia Corona, para conseguir el mejor y más adecuado funcionamiento de todas las tareas administrativas se requería también al propio gobernador para que mantuviera un buen trato hacia los oficiales del sueldo y controlara, con el mayor de los respetos, la labor por ellos desempeñada. En ocasiones, como hemos referido, las relaciones entre el gobernador y estos cargos llegaba a ser la de parientes cercanos, en una simbiosis de poder y aspiraciones. Pero más allá de las relaciones de parentesco que puedan llegar a formalizarse, en lo relativo a la labor que desempeñan el gobernador siempre intenta que estos oficiales den el reconocimiento definitivo a decisiones tomadas o acciones ordenadas por él, actitud que los oficiales rechazan y que tiende a ser prohibida bien entrado ya el siglo XVII, al haberse convertido en una forma más de coacción del gobernador respecto a los oficiales.

Conforme el gobernador se va inmiscuyendo en labores de administración que competen principalmente a los oficiales reales, y éstos proceden a imposibilitar la tendencia al poder omnímodo del gobernador a través de su labor inspectora y ordenadora, se inicia un proceso en el cual los oficiales se van convirtiendo en oposición al gobernador, perpetuando y ensanchando ese doble antagonismo con el paso del tiempo. De forma significativa, en estos nombramientos de oficiales del sueldo en Orán también se hacen evidentes la presencia de los mismos mecanismos advertidos en relación con la figura del gobernador, actitudes que no son sino remedo de los mecanismos constatados para la España del siglo XVI, como puedan ser por ejemplo la patrimonialización de cargos públicos. Así, por ejemplo, la familia Rejón de Silva se perpetúa en el cargo de pagador de Orán a lo largo de las décadas posteriores a la conquista -en la cual participó- y sigue ejerciéndolo bien entrado el siglo XVII.

A pesar de estos problemas, lo cierto es que el cargo de gobernador en Orán y Mazalquivir se presenta a los ojos de la nobleza de armas como uno de los mejores puestos a los que podía aspirar si manejaba con astucia sus influencias en la Corte. Por un lado, suponía la adquisición de una importante fortuna personal en la que no sólo había que contar los ducados que reportaba su nada desdeñable salario, sino los beneficios que obtenía de cada cabalgada que encabezaba contra los musulmanes enemigos de las plazas, los llamados moros de guerra. De cada una de estas operaciones ofensivas, el gobernador obtiene para sí la llamada *joya*, consistente, por lo general, en uno o varios musulmanes que pasarán a formar parte de su ya nutrido grupo de criados traídos desde España. En ocasiones, cuando la situación económica de las plazas era más gravosa y el gobernador hacía frente a los pagos adeudados con su propio dinero, mecanismo cada vez más frecuente conforme nos adentramos en el siglo XVII, la Corona le recompensaba con el quinto del botín obtenido en cada cabalgada contra los moros de guerra, fracción que en principio era siempre una prebenda regia. Pero es que, además de estos beneficios económicos, los gobernadores encontraban en el norte de África una razón prioritaria para aumentar el honor de su linaje a través de la lucha contra el infiel, en la que buena parte de la nobleza española había conseguido títulos y preeminencias desde siglos anteriores, y mediante la que se ofrecía una buena causa para seguir consiguiendo motivos de ascenso militar y social. El propio Diego Suárez hablará del



gobierno de Orán como de cargo que “siempre le pretenden y estiman muchos caballeros de España, por ser, como es, la de Orán y sus reinos, tenencia muy honrosa y provechosa, aunque arriscada y peligrosa”<sup>11</sup>.

Cada vez que se produce una vacante voluntaria o forzosa en el cargo, son numerosos los pretendientes que presentan ante la Corte su interés en ocupar el puesto de gobernador. Como ejemplo baste citar lo ocurrido tras la salida del doble presidio de D. Diego Fernández de Córdoba, III marqués de Comares, cuando hasta un total de nueve nobles, algunos de ellos al frente de relevantes puestos en diversas fronteras y guardias de la Monarquía, aspiran a este cargo en el norte de África. El primero de los candidatos es D. Gabriel Niño de Zúñiga, que lleva ocupando en interinidad el gobierno de estas plazas desde 1594, maestre de campo, castellano de Lisboa, amén de otros servicios a la Corona en Italia y Flandes; él señala que está actuando como gobernador interino consiguiendo la reputación y seguridad que conviene a ambas plazas, por lo que cree que puede aspirar a desempeñarlo en propiedad. Pero también don Luis de la Cueva y Benavides -que sirve al rey como gobernador en Galicia-, el conde de Lodosa, el maestre de campo don Alonso de Luzón, don Francisco de Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete -avalado por la categoría de sus antepasados en el gobierno de Orán, así como por su propia experiencia en estas plazas asistiendo al anterior gobernador, don Martín de Córdoba-, don Francisco de Coloma -general de la armada de la guarda de las Indias-, don Hernando Hurtado de Mendoza -capitán general del reino de la costa de Granada-, don Juan Velázquez -capitán general de la provincia de Guipúzcoa- y el marqués de Ardales, manifiestan su interés por este puesto<sup>12</sup>, que finalmente recaerá en el conde de Alcaudete, elección en la que pesa su probada “experiencia assi de sitios como de otras necesidades que en aquellas plaças se pueden offereçer”<sup>13</sup>. Ante la marcha de un gobernador, las intrigas palaciegas no tardan en desatarse y las deliberaciones para elegir sucesor son arduas, sobre todo desde que la llegada de Felipe III al trono relegase en buena medida a los Córdoba de su continuidad al frente de este cargo y se abriera la posibilidad para otros linajes nobiliarios de acceder a él. Hasta tal punto el cargo de gobernador de Orán y Mazalquivir, en particular, y el de cualquier presidio norteafricano en general, suponía la adquisición de fortuna personal, honor y prestigio que pronto empezó a circular por Castilla un refrán bien significativo que rezaba: “Rey en Castilla o Alcaide en Berbería”<sup>14</sup>, en referencia a la relativa paridad de prestigio y honor que ambas posiciones ofrecían.

El gobernador de Orán se sitúa en la cúspide de la organización militar, civil y judicial de una ciudad avanzadilla de la lucha de la Cristiandad contra el Islam en tierra de infieles. Desde su residencia oficial en la alcazaba, en la parte más alta de la ciudad amurallada, desde la que otea y vigila todo lo que entra y sale de Orán por tierra y mar, el capitán general controla todas y cada una de las vertientes de la vida pública de una ciudad que representa en sí misma el éxito y el fracaso de la presencia española en tierras de Berbería. El goberna-

<sup>11</sup> D. SUÁREZ MONTAÑÉS., *Historia del Maestre último* ..., parte I, cap. VIII, p. 133.

<sup>12</sup> AGS. GA. Leg. 437, fols. 274, 320, 321 y 322 / junio 1595. Consultas del Consejo de Guerra.

<sup>13</sup> AGS. GA. Leg. 438, fol. 116 / 24 agosto 1595. Consulta del Consejo de Guerra.

<sup>14</sup> J. CAZENAVE., “Les gouverneurs d’Oran ...”, p. 278. Frente a la apetencia de este cargo por parte de la nobleza no hay que dejar de lado la actitud de la mayor parte de la guarnición, que acude recelosa y, en muchas ocasiones incluso engañada, a prestar su servicio al rey con las armas en estos presidios norteafricanos. Conforme aumente la penuria en la que quedan estas plazas a causa de una ocupación restringida del espacio que les obliga a depender de España en todo tipo de envíos para su subsistencia y éstos no sean todo lo frecuentes ni numerosos que debieran ser para abastecer a toda la guarnición, encontraremos cada vez con mayor frecuencia casos de soldados que llegan a estas plazas creyendo ser otro su destino. A ello hay que añadir los numerosos casos de desertación que se cuentan entre las filas de la infantería de estos presidios, cuyos soldados prefieren acabar renegando de la fe por cuya defensa un día empuñaron las armas.

dor tiene a su cargo el mantenimiento de una guarnición que defiende la posición conseguida y aunque la situación en la que quedan las plazas sea cada vez más precaria conforme avanza el siglo XVI y nos adentramos en el XVII por la imposibilidad de un autoabastecimiento ni de unos envíos regulares desde España, al gobernador compete la prioritaria tarea de levantar la moral de sus soldados, recordándoles diariamente el honor de empuñar las armas por el rey de España en la frontera norteafricana. Las relaciones con los musulmanes que colaboran con los cristianos en el abastecimiento de las plazas pasan por un pacto de vasallaje firmado con el gobernador en nombre del monarca español, mientras que las cabalgadas contra moros de guerra no pueden realizarse sin su anuencia ni presencia al frente de las tropas que abandonan el presidio por unos días para traer esclavos y mercancías con las que asegurar la subsistencia de las plazas por una temporada. La vida económica de la ciudad, el control de la minoría judía, el adecuado funcionamiento del cabildo, las tareas de los oficiales del sueldo, la presencia eficaz de la Iglesia en tierra de infieles, son todas facetas de una vida cotidiana en esta plaza española en Berbería en las que la figura del gobernador se hace presente de manera continuada.

Pero es que, además, Orán se sitúa como centro y epicentro de los intereses de la Monarquía en el norte de África frente a las regencias berberiscas controladas por el Imperio Otomano; desde esta perspectiva, el gobernador de Orán se convierte en figura supervisora de una red de espionaje que intenta hacer llegar a Madrid toda la información que pueda extraerse de los contactos que bajo su dirección van y vienen desde Argel, Túnez, Tremecén o Marruecos. Aunque de todo lo que hace y deshace respecto a todas estas parcelas de poder el gobernador deba informar a Madrid, y a pesar de que la comunicación entre la Península y el doble presidio sea bastante rápida y fluida, cifrándose —en condiciones normales— en un día de navegación entre Orán-Málaga u Orán-Cartagena, lo cierto es que quien estaba dentro de las plazas era el gobernador y con él toda su red familiar y clientelar, y no los consejeros de Guerra o Estado ni el monarca. Si además de esto los mecanismos de control real de la labor desempeñada por el gobernador quedaban disminuidos como solía ocurrir en el caso de los oficiales del sueldo, podemos imaginar hasta qué punto el gobernador podía acabar comportándose como un pequeño rey en su corte oranesa. De acuerdo con estos presupuestos no resulta exagerado afirmar que existe un cierto paralelismo entre las formas cortesanas de Madrid y las que surgen en Orán al calor del poder casi absoluto que consigue el gobernador en el transcurso del siglo XVI<sup>15</sup>.

### 3. La "Gran Corte" de Madrid y la "Corte Chica" de Orán.

A pesar del desarrollo de las funciones y, en consecuencia, del poder y prestigio alcanzado por el gobernador de Orán en el transcurso del siglo XVI, no será hasta la centuria siguiente cuando en España se acuñe la expresión de "Corte Chica" para denominar a la ciudad de Orán en general, más que en referencia a la vida que se desarrolla en el interior de la alcazaba como residencia oficial del gobernador. En contra de lo que la evolución del poder de la figura del gobernador pudiera hacer pensar, no será la adquisición de un mayor poder por parte de la cabeza visible del gobierno en Orán y de su propia corte señorial lo que conducirá a esta denominación de la plaza o, al menos, no por completo. En efecto, en las últimas décadas del Quinientos ya es bien perceptible la situación de precariedad en la que van quedando unos presidios que encarnan en alguna medida la frustración de la Cristiandad en

<sup>15</sup> J. Cazenave llega a afirmar, en este sentido, que estos poderes tan amplios del gobernador le llevaban a comportarse "à l'égard de tous ses subordonnés, militaires et civils, comme un roitelet absolu". J. CAZENAVE., "Les gouverneurs d'Oran ...", p. 279.

su enfrentamiento con el Islam y, sobre todo, lo obsoleto de una permanencia en tierras del otro lado del Estrecho cuando lo que está funcionando ya en las relaciones con el Imperio Otomano no es la guerra abierta sino la firma de treguas<sup>16</sup>.

Orán, a pesar de ser el presidio español por excelencia en el norte de África, también padece la precariedad de una Monarquía que atraviesa bancarrotas cada vez más frecuentes, al tiempo que el auge del corso turco-berberisco en aguas del Mediterráneo occidental tras la firma de las primeras treguas con la Sublime Puerta después de la batalla de Lepanto aísla aún más la plaza de una Península de la que oficialmente depende para su abastecimiento diario, aunque en la práctica haga ya mucho tiempo que se comercia con musulmanes del entorno. Las penalidades que atraviesan los presidios norteafricanos, y de las que Orán-Mazalquivir no se libran, llevan a los gobernadores a expresar en las cartas que dirigen al Consejo de Guerra su continuo malestar y queja por la situación de las guarniciones, sin alimento, pertrechos, municiones y muy escasos de ropa y calzado, y junto a ello su denuncia hacia una situación personal que empieza a alejarse bastante del ideal de gobernador rico, respetado y poderoso con el que este cargo sigue siendo contemplado desde la Corte madrileña. Una y otra vez los gobernadores expresan en estas misivas la imposibilidad de cobrar el total de su salario anual, como le ocurre a don Diego Fernández de Córdoba quien, relevado del puesto de gobernador en agosto de 1594, comprueba cómo más de un año después aún se le adeudan 2.564.670 maravedís de su sueldo, lo que suponía casi un año y medio de su salario sin percibir<sup>17</sup>. Situaciones similares van a ser tan sólo el comienzo de los problemas económicos de los gobernadores, que ven la imposibilidad de mantenerse al margen de unas dificultades que alcanzan al conjunto de la guarnición que sirve en las plazas.

<sup>16</sup> Tras el impulso que Felipe II da a la fortificación de Orán y Mazalquivir después del asedio argelino de 1563, la pérdida de La Goleta y Túnez en 1573-74, unido a las cada vez más precaria situación hacendística de la Monarquía, al borde de su segunda bancarrota, hacen al monarca replantearse la viabilidad y oportunidad de seguir manteniendo plazas tan costosas en la costa norteafricana. Por este motivo envía al príncipe Vespasiano Gonzaga a inspeccionar los enclaves españoles en Argelia para examinar el estado de sus fortificaciones. Felipe II temía que, de igual manera que la proximidad de los fuertes de Túnez y La Goleta habían acabado siendo un perjuicio más que un beneficio para defender la presencia española en la zona, Mazalquivir y Orán pudieran correr algún día la misma suerte. El informe que remite Vespasiano Gonzaga le confirma en sus dudas, pues concluía en la idea de dismantelar Orán, centrando todos los esfuerzos en Mazalquivir, mejor situado y dotado del mejor puerto de la Berbería central. A pesar de la rotundidad de este informe, Felipe II prefirió someter el asunto a la decisión del Consejo de Guerra, cuyos miembros se manifestaron mayoritariamente favorables al abandono (AGS. GA. Leg. 79, fol. 123). La solución a este dilema aún se demoraría algún tiempo. En 1576, el capitán Sancho de Leyva presentaba a los Consejos de Estado y Guerra su propio dictamen, poniendo de manifiesto la importancia de conservar Mazalquivir, pero afirmaba que era imposible conseguirlo sin mantener también Orán: "Orán favorece en infinitas cosas a Mazalquivir, de muy mucha importancia, porque les dan ánimo, avisos, provisión a tiempo, estorba a los fuertes, a los cuales ya que hiciesen algunos, no la pueden sustentar sin tener más gente en campo de la que hubiere en Orán, de a donde se hacen señales a Mazalquivir, ... que teniéndose Orán no se puede perder Mazalquivir, ni sustentarse Orán si se dismantela". (*CODOIN*, vol. 112, p. 489. "Ventajas de fortificar Orán"). Finalmente se resuelve conservar ambas plazas, enviándose a Giacome Pelearo, apodado el Fratin, ingeniero militar que también había trabajado en La Goleta y en Melilla, para mejorar y ampliar las fortificaciones del doble presidio.

<sup>17</sup> AGS. CJH. Leg. 339-16 / 6 noviembre 1595. Carta del Consejo de Hacienda a los oficiales del sueldo de Orán y Mazalquivir. Pero no se trata de un caso aislado; en septiembre de 1616, un mes antes de que abandone su cargo como gobernador de las plazas, el conde de Aguilar escribe al Consejo de Guerra haciendo ver que se le restan de su sueldo 17.000 reales (AGS. GA. Leg. 815, s.f. / 12 septiembre 1616. Carta de D. Felipe Ramírez de Arellano). A don Jorge de Cárdenas Manrique, duque de Maqueda, se le llegan a adeudar, al final de sus dos periodos como gobernador de las plazas, 6.608.036 maravedies, lo que suponía más de tres años de salario sin cobrar (AGS. CJH. Leg. 523-12 / 30 noviembre 1625. Carta de los oficiales del sueldo).

Conforme pasen los años, el agravamiento de la situación financiera de la Monarquía impedirá cada vez con mayor frecuencia el envío del dinero y productos necesarios para la subsistencia de la gente de guerra del doble presidio. Así, entrado ya el siglo XVII, varios gobernadores acceden a prestar parte de su propio dinero para ayudar a la supervivencia de la gente de guerra; éste será el caso del conde de Aguilar, que presta 155.338 reales "por no aver dinero en las arcas de S.M. para el sustento del ospital y socorro de los enfermos"<sup>18</sup>. Pero aún más significativo es lo ocurrido a su sucesor al frente del gobierno, D. Jorge de Cárdenas Manrique, quien al poco tiempo de llegar a ellas, y viendo la penuria en que vive la gente de guerra, toma la decisión de enviar a Cartagena todas sus joyas "de oro y diamantes", para que sean vendidas o empeñadas y poder comprar con ese dinero trigo y cebada con el que alimentar a la guarnición<sup>19</sup>. A pesar de todo, el gobernador y capitán general sigue manteniendo su preeminencia dentro de las plazas y en ningún caso debemos entender que estas dificultades apaguen las apetencias e intrigas que se generan en la Corte para conseguir este anhelado nombramiento. Paulo Arias Temprado, oidor de la Audiencia y Chancillería de Valladolid, y que realiza una visita al conjunto de plazas españolas en el norte de África por encargo de Felipe IV a comienzos de su reinado, deja bien claro cómo "(...) son tan dueños de todo los Generales de Orán"<sup>20</sup>.

De manera paralela a este proceso que se observa en relación con el cargo de gobernador de Orán desde finales del siglo XVI y de forma aún más patente en el transcurso del Seiscientos, esta plaza enclavada en la frontera norteafricana de Berbería va a ir convirtiéndose en destino prioritario de un destierro peculiar y muy específico que acaba por caracterizar a un enclave que desdibuja sus objetivos primitivos conforme pierde sentido la permanencia de las armas españolas allende el Estrecho. La denominación de Corte alternativa que no había alcanzado Orán en relación con el mundo de poder y supremacía generado en torno al gobernador y su alcabaza sí va a conseguirse cuando, conforme avance el siglo XVII, se intensifique un comportamiento que ya había oteado sus primeros esbozos en la época del Emperador. Y es que a Orán irán a deportados individuos pertenecientes a los diversos escalafones nobiliarios, a esa misma nobleza para la que en alguna medida se ideó la continuación de la lucha contra el infiel al otro lado del Estrecho una vez que los objetivos de reconquista de todos los límites peninsulares se habían visto satisfechos, y también a esa misma nobleza de entre cuyas filas seguían saliendo los elegidos para desempeñar las más altas y complejas tareas de gobierno y dirección de la vida pública de cada una de estas plazas norteafricanas. Estamos, por tanto, ante un destierro que afecta, de forma mayoritaria<sup>21</sup>, a per-

<sup>18</sup> AGS. GA. Leg. 777, s.f. / 16 octubre 1613. Carta de D. Felipe Ramírez de Arellano.

<sup>19</sup> AGS. GA. Leg. 825, s.f. / 17 septiembre 1617. Carta de los oficiales reales de Cartagena.

<sup>20</sup> P. ARIAS TEMPRADO., *Apuntamientos que para el gobierno de las plazas de Orán y Maçarquivir, se proponen a su Magestad, por el Licenciado Arias Temprado Oidor de Valladolid...*, S.I., s.a., (circa 1639). BNM. R/ 39.157, apuntamiento núm. 38, fol. 18 v. Arias propone moderar las ganancias de los gobernadores, con medidas como bajar su sueldo ordinario, o incluso, desposeerles del cobro de los quintos de cabalgadas. En la misma opinión incide el autor al señalar la importancia que tiene impedir que ni gobernador ni oficiales del sueldo puedan contratar en ambas plazas, pues "siguense en todas partes gravísimos inconvenientes de no observarse esta ley, y en ninguna con mayores daños que en aquellas plaças, por la cortedad dellas y absoluta mano del General". (fol. 20 v, apuntamiento núm. 44).

<sup>21</sup> Durante el siglo XVI y el primer tercio del XVII los presidios norteafricanos no funcionan aún como lugar de cumplimiento de condena para individuos en general que hayan cometido delitos en la Península. Esto es debido en gran medida al hecho de que sigue siendo mucho más rentable y necesario el paso de estos condenados a remar en galeras que defiendan a la Cristiandad del empuje otomano en el Mediterráneo. Conforme este tipo de servicio vaya quedando obsoleto a tenor de la evolución en las relaciones entre los dos grandes imperios que surcan las aguas del Mediterráneo, y desde dentro de las plazas se haga ostensible la necesidad de una gente de guerra que cada vez se moviliza más para las guerras del interior de la Península y de Europa

sonas de elevada extracción social que viven en la Península y que tienen en el abandono del lugar en el que viven habitualmente la pena que su comportamiento ha merecido a los ojos del rey y de sus consejeros. Es un exilio de "sangre y calidad" que afecta a individuos pertenecientes a grupos sociales influyentes que han caído en desgracia ante el rey por motivos políticos en la mayoría de las ocasiones, aunque también podemos asistir a destierros provocados por causas religiosas o incluso, morales. También se dio el caso de envíos de hijos de nobles cuyos padres estimaban que sus vástagos necesitaban alejarse por un tiempo del lugar donde vivían como escarmiento por alguna mala conducta o comportamiento indebido, caso en el que el monarca tampoco tenía reparos en firmar una cédula que les obligara a permanecer durante un tiempo en algún enclave norteafricano. En este sentido, se trata de un destierro que respeta los títulos y preeminencias de cada noble, así como sus bienes materiales y la presencia en el lugar de destierro de sus criados, o incluso de todo su séquito personal. De acuerdo con estos presupuestos, y aunque no hemos hallado relación documental que lo confirme, este traslado casi íntegro de la casa del noble desterrado a Orán favoreció la llegada de fortunas que propiciaron mecanismos de ostentación que bien pudieron plasmarse en la celebración de fiestas y celebraciones similares a las que desarrollaban en sus lugares de residencia en la Península y que contribuirían a crear el epíteto de "Corte Chica" con el Orán empezó a ser conocida desde España.

Si se envían a Orán y no a ningún otro territorio de los muchos que forman la Monarquía Hispánica en este periodo es porque, en primer lugar, Orán es un destino que puede resultar adecuado y provechoso para una nobleza que ha conseguido sus títulos y prerrogativas en el transcurso de una lucha contra el infiel que ha durado siglos. De entre todos los presidios norteafricanos, Orán es el único con aspiraciones de gran ciudad, es decir, es un destino donde esta nobleza aún puede mantener sus pretensiones y calidades y, sin estar demasiado alejado de la Península, le permite llevar un modo de vida bastante próximo a lo que solía ser hasta entonces. Además, es un enclave de dimensiones reducidas, en el que es bastante fácil controlar a quien está dentro; su aislamiento en medio de tierra de musulmanes hace que quien quiera huir deba pensárselo dos veces ante la posibilidad de caer preso en manos enemigas y no regresar nunca al hogar de origen. Frente al mundo americano, el norte de África ofrece la proximidad a la Península y el ser un territorio donde la conquista, expansión y colonización han quedado ya obsoletos desde las primeras décadas del siglo XVI, motivos que disminuyen la posible tentación de esta nobleza de convertirse en cabecillas militares de nuevos avances por el territorio.

Una vez dentro de Orán, el desterrado perteneciente a las esferas nobiliarias no queda encerrado en alguno de sus recios castillos o en la cárcel de la ciudad, excepto en casos de que al destierro acompañe una pena de multa que no se pague oportunamente o cuando se comete algún delito durante la estancia en el presidio. Por el contrario, lo que se les exige y se espera de ellos es que se sitúen cerca del gobernador "sin obligarlos a que sienten plaza

---

—crisis de 1640, Guerra de los Treinta Años— se irá haciendo más frecuente el recurso al envío de condenados —presidarios— a estas plazas de allende el Estrecho. Estos presidiarios cumplían sus penas reclusos en los castillos y fuerzas de estas plazas, al tiempo que prestaban un duro y penoso servicio para su defensa y mantenimiento, a diferencia de la posición social que mantienen los desterrados pertenecientes a la nobleza. Llegados al siglo XVIII se hace preciso distinguir entre desterrados, nobles y ricos que realizan un servicio militar y presidiarios, condenados a cumplir sus penas haciendo un duro trabajo en un presidio, unos y otros conviviendo a la vez en Orán. Estos últimos alcanzaron cifras que superaron con mucho los dos millares de individuos entre 1772 y 1788. Sobre la importancia de las plazas norteafricanas como lugar de cumplimiento de penas para condenados en la España peninsular moderna, R. PIKE., *Penal Servitude in Early Modern Spain*, Wisconsin, 1983, pp. 41-45.

debaxo de estandarte'<sup>22</sup>, pero realizando algún servicio en pro del mantenimiento de la plaza bajo control español, ayudando al gobernador en tareas defensivas y de vigilancia, o empuñando las armas en defensa de la fe cristiana o colaborando en las cabalgadas contra aduare de moros guerra. En condiciones ordinarias, el destierro no debe prolongarse más de los años que han sido establecidos previamente en España, los cuales suelen oscilar en la documentación que se ha analizado para la presente investigación entre mínimos de seis años y máximos de diez, si bien es posible encontrar casos aislados de destierros a perpetuidad, cuando la causa por la que el exiliado ha salido de España es lo suficientemente grave como para que se valoren los peligros de su regreso o cuando protagoniza algún escándalo o rebelión en el interior de las plazas que merezca un castigo de por vida. Éste es precisamente uno de los problemas que ofrece la perpetuación de esta plaza como destino de destierro durante los tres siglos que se mantiene en manos españolas: no siempre será factible controlar el comportamiento y actitud de un desterrado de elevada extracción social que mantiene en alguna medida sus redes de poder e influencia en la Península y que nunca olvida que ha sido alejado de ella en contra de su voluntad. En más de una ocasión encontramos situaciones en las que un desterrado impide el ya de por sí complejo desarrollo de las actividades cotidianas de los diversos grupos de población de una ciudad con caracteres tan específicos como los de una urbe fronteriza; su escasa adaptación a este tipo de vida impuesto por la fuerza, sus -en ocasiones- difíciles relaciones con el gobernador y otras autoridades de la plaza o la presencia en ella de otros desterrados que estén relacionados con la causa por la que han acabado sirviendo unos años en Orán, son motivos potenciales de desórdenes que pueden llegar a protagonizar estos desterrados y que en absoluto benefician el control y gobierno pacífico de la plaza.

Pocos años después de la conquista de Orán, Carlos V ya emplea el presidio de Orán como lugar de destierro para la nobleza. El primer gran conflicto social y político al que el Emperador habrá de hacer frente en España, la revuelta de las Comunidades, ofrecerá la causa por la que don Pedro Girón, tercer conde de Ureña y Señor de la villa de Osuna, aspirante al ducado de Medina Sidonia y uno de los cabecillas de la revuelta ante la hostilidad de Carlos V a ceder a sus pretensiones nobiliarias, sea enviado por unos años a servir al rey en Orán<sup>23</sup>. Como refiere Diego Suárez, Girón aparece en esta plaza en 1523 participando en los rebatos y cabalgadas que se organizan al lado del gobernador, don Luis Fernández de Córdoba, marqués de Comares. Las características del destierro en Orán quedan, por tanto, bien establecidas tan sólo quince años después de la conquista de este enclave: una causa política lleva a un hombre con pretensiones de ascender en su nobleza a servir al rey cerca de la figura del gobernador de una plaza fronteriza, ofreciéndosele la oportunidad de curtirse

<sup>22</sup> AGS. GA. Leg. 599, s.f. /1602

<sup>23</sup> Don Pedro Girón y Velasco también era señor de las villas de Peñafiel, Tiedra, Cazalla de la Sierra, Morón de la Frontera y Archidona, entre otras. Había combatido contra los franceses en las guerras por la anexión de Navarra y acompañó a Carlos V a Galicia. Según refiere J. B. AVALLE-ARCE, "desde los años de Fernando el Católico don Pedro se hizo llamar duque porque él estaba casado con doña Mencía de Guzmán, hermana de don Enrique de Guzmán el Doliente, IV duque de Medina Sidonia. A la muerte de don Enrique (20 enero 1513), que no dejó hijos, don Pedro reclamó el ducado para sí por su matrimonio con doña Mencía, y sostenía que el heredero presunto (el hermano impotente de don Enrique, don Alonso) era hijo de un matrimonio posterior, de ahí sus pretensiones e ínfulas de Duque. Fueron, precisamente, estas ambiciones las que lo llevaron a hacerse comunero, dado que Carlos V no le atendía. Sucedió a Juan de Padilla en el cargo de Capitán General de la Junta y por eso fue exceptuado en el perdón general de 28 de octubre de 1522, pero movido por gestiones de amigos y parientes, (...) y arrepentido de su proceder fue perdonado por Real Cédula de 27 de marzo de 1524". G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO., *Batallas y quinquagenas*, (ed. J. AVALLE-ARCE). Salamanca, 1989, vol. I, p. 250.

en mil batallas frente al infiel para volver en unos años a España, una vez redimida su culpa. Éstas son, precisamente, las virtudes que destaca el franciscano y cronista de Carlos V Antonio de Guevara, en una de su *Epístolas familiares*, que dirige a su amigo don Pedro Girón, quien le había visitado en Ávila en el camino hacia su destierro en Orán<sup>24</sup>. Guevara, además de censurarle por el error cometido al participar en una revuelta contra el Emperador para conseguir objetivos personales, trata de consolarle resaltando los beneficios de este destierro en contraposición a la ociosidad de la nobleza cortesana:

*"... diría yo si osase, señor don Pedro, que mucha más razón hay para que vos os presciéis de capitán africano, que no de caballero español, pues la honrra que en España perdistes, en África la cobrastes. Y porque no parezca que hablamos de gracia, y que nuestra pluma escribe lo que se le antoja, cotejemos lo que acá, en España, hacíades con lo que agora, en Orán hacéis, y veréis y conoceréis en vos muy claro en cómo si alguna pena tenéis en vuestro corazón, más es por la opinión que tenéis que por la vida que pasáis. Acá, señor, en España, érades muy bien afamado y nombrado de montero famoso, de bolar una garza, matar un puerco, jugar a la primera, servir a una dama, escribir requiebros, hacer banquetes, frecuentar palacios, regocijar la corte, acostaros a la una y levantaros a las once. Todas estas cosas, aunque son ejercicios de mancebos cortesianos, no lo son por cierto para caballeros animosos, porque los mayorazgos y grandes estados de España no los ganaron nuestros antepasados dándose a recrear en la caza, sino sirviendo a sus príncipes en la guerra. El ejercicio que nos dicen que tenéis ahí en Orán es levantaros de mañana, almorzar en pie, tener siempre ensillado, descansar sobre la lanza, hacer de antenoche mochila, tocar muchas veces al arma, rondar la muralla, salir a las escaramuzas, hablar siempre de guerra, pelear con los moros, animar a los soldados, traer la lanza ensangrentada o la cabeza descabrada. Ved, pues, señor don Pedro Girón, cuál de estas dos cosas os está muy más honrrosa para vuestra fama, o más provechosa para vuestro estado, es a saber, presciaros de caballero esforzado o de cortesano enamorado"*<sup>25</sup>.

Antonio de Guevara presenta el destierro en Orán como un confinamiento que otorga prestigio a quien lo padece, porque ofrece la posibilidad de recuperar la honra perdida a través de la lucha contra el infiel. En este sentido, es un destierro activo, en el que la nobleza que ha caído en desgracia se reaprovecha en la guerra contra el musulmán porque interesa su aportación, al tiempo que se le da una oportunidad para que se redima y vuelva a la Corte con una hoja de servicios intachable:

*"Yo espero en Nuestro Señor y espero en vuestro buen ánimo que por defender esa ciudad de los moros, y por aumentar la fe de los christianos, haréis tales y tan nobles proezas ahí en África, que volváis tan ilustre a España como volvió Camillo a Roma. En esa guerra de África, a do se halla vuestra persona desterrada, aconsejoos, señor, que os mostréis largo en el gastar, paciente en el sufrir, animoso en el pelear, sobrio en el comer, comedido en el hablar, y aun christiano en el vivir, porque todos los que acá les pesó de lo que hezistes se prescien agora de los que hacéis"*<sup>26</sup>.

Tras cumplir su breve destierro y redimir sus culpas, Pedro Girón regresará a España, donde servirá con las armas a su rey a partir de entonces y hasta su muerte en 1531. Pero el destierro en Orán no siempre se culmina con el feliz regreso a la Península que protagoniza el conde de Ureña. Don Luis Colón y Toledo, duque de Veragua y nieto de Cristóbal Colón,

<sup>24</sup> "Letra para don Pedro Girón cuando estaba desterrado en Orán. Es letra muy notable para todos los hombres que están desterrados y atribulados", en A. DE GUEVARA. *Libro primero de las Epístolas familiares* (edición y prólogo de José María de Cossío) Madrid, 1950-1952. 2 vols. vol. I, pp. 419-435.

<sup>25</sup> Ibidem, pp. 425-426.

<sup>26</sup> Ibidem, pp. 430-431.

llega desterrado a Orán el 6 de septiembre de 1567<sup>27</sup>. Su delito: haber cometido trigamia, causa por la cual fue prendido por la justicia en 1557 y conducido a la fortaleza de Arévalo, de donde sería trasladado a Simancas y de allí a Villaverde, para acabar recluso casi catorce años en Madrid<sup>28</sup>. Su destierro coincide con el gobierno en Orán del Maestre de Montesa, relatado por Diego Suárez en su fascinante crónica del doble presidio. A través de sus páginas conocemos cómo el duque participó en varias de las cabalgadas que el Maestre realizó durante su primer año de gobierno en Orán, “siendo mu[y] llano y afable caballero, muy amigo de los soldados y del Maestre, siendo para con todos muy franco”<sup>29</sup>. Pero su disponibilidad para ayudar en lo posible al mantenimiento de Orán no le sirve en absoluto para abandonar la dramática situación económica en la que llega a las plazas y que arrastrará hasta su muerte unos años después en la propia ciudad de Orán, de la que Suárez se hace eco, aprovechando la circunstancia para alabar las excelencias de D. Pedro Luis Galcerán de Borja, Maestre de Montesa, al frente del gobierno de esta plaza:

*“Falleció el duque de Veragua, almirante de las Indias, en la ciudad de Orán, domingo que se contaron tres de febrero de este año 1572, después de haber padecido muchas enfermedades, en su cama. Al cual había sustentado lo más del tiempo que en Orán estuvo el Maestre de Montesa, dándole ración de su casa cada día, con otros regalos que le enviaba de su mesa cuando el duque no subía a su casa a comer con él. Y después que cayó enfermo, mayormente le regaló siempre en la cama, donde se fue a despedir de él al tiempo que partió para España.*

*Es averiguada cosa que pasara este duque en Orán mucha más necesidad de la que pasó, antes y después de enfermo, si el Maestre no le acudiera cada día con ración y otros regalos. En que fue justo juicio de Dios que un príncipe que tantas rentas había tenido y gozado en este mundo, en las Indias y fuera de ellas, y señor de tantos vasallos y criados en su servicio, con título de duque y almirante de las Indias, viniese en tan pocos días a tanta soledad y miseria en una cama enfermo, que apenas le entraba nadie a visitar. En que me cer[tifi]caron muchas veces personas fidedignas de aquella ciudad que se demandó limosna de puerta en puerta para enterrarle, que fue en la iglesia del convento de san Francisco, con harto poca autoridad ni pompa”<sup>30</sup>.*

<sup>27</sup> Don Luis Colón y Toledo (1520-1572), nieto de Cristóbal Colón e hijo de Diego Colón y de María de Toledo. Continuó los llamados Pleitos Colombinos contra la Corona española comenzados por su padre, hasta que en 1536 llegó a un acuerdo con la Corona por el que recibía el título y privilegio de Almirante de las Indias y renunciaba a los demás derechos a cambio del marquesado de Jamaica, el ducado de Veragua y una renta vitalicia de 10.000 ducados anuales. De 1540 a 1551 fue capitán general de Santo Domingo, por nombramiento real. En 1556, tras infructuosas tentativas de colonizar el ducado de Veragua, lo abandonó a cambio de una pensión adicional de 7.000 ducados.

<sup>28</sup> Don Luis Colón se había casado legítimamente en Santo Domingo, en septiembre de 1546, con doña María de Mosquera y Pasamonte, unión que quiso anular para casarse con doña María de Orozco, dama casada en Honduras, alegando que le había dado palabra de matrimonio a ella con anterioridad. Llegado a España, contrajo matrimonio en Valladolid en junio de 1554 con doña Ana de Castro Ossorio, unión bendecida por el Papa en 1555. No contento con este bagaje sentimental, casó de nuevo en secreto en Madrid, en 1564, con doña Luisa de Carvajal con la que acude a su destierro oranés. En tierras africanas nace, en 1570, su hija, Petronila Colón y Carvajal, que curiosamente acabará contrayendo matrimonio con el noble don Luis de Sotomayor, capitán de una compañía de infantería en Orán y que en 1620 será nombrado alcalde de Melilla, de acuerdo con la información extraída por el Dr. José Luis Gonzalo Sánchez-Molero en su investigación sobre el servicio militar de familias nobiliarias andaluzas en plazas norteafricanas de España durante los siglos XVII-XIX. Con estos datos, más allá de la anécdota o de la simple reconstrucción biográfica, se advierte la estrecha imbricación que llegó a darse en estos enclaves de Berbería entre los diferentes estratos nobiliarios que acuden a allí por causas muy diversas, mostrando cómo la presencia de estos mecanismos refuerzan ese papel de pequeña corte alternativa que encarna Orán en el transcurso de los siglos modernos.

<sup>29</sup> D. SUÁREZ MONTAÑÉS., *Historia del Maestre último* ..., parte I, cap. XIII, p. 198.

<sup>30</sup> *Ibidem.*, parte II, cap. XII, fol.371 r.



Pero ni el propio Maestre de Montesa está muy alejado de la peripecia del destierro nobiliario en una plaza fronteriza. Don Pedro Luis Galcerán de Borja<sup>31</sup>, que recibe, como se ha señalado, el título de gobernador de Orán y Mazalquivir el 26 de diciembre de 1566, llega a Orán en junio de 1567 y de entre quienes acuden al puerto de Mazalquivir a recibirle se encuentra Felipe Manuel de Borja, “hermano carnal del mismo Maestre, que había días estaba desterrado en aquellas fronteras”<sup>32</sup>. La causa del exilio vuelve a ser política y nos sitúa en las guerras de banderías que se desarrollan en Valencia en la segunda mitad del siglo XVI por el control del *Consell* y de las instituciones urbanas de la ciudad, en concreto en las luchas entre el linaje de los Figuerolas y el de los Pardos de la Casta. La familia Borja, que protegía al primero de los linajes citados, es sospechosa de homicidio en el asesinato de don Diego de Aragón, hijo natural del duque de Segorbe, a la sazón valedor de los Pardos de la Casta, acaecido el 27 de febrero de 1554<sup>33</sup>. A tenor de esta muerte, don Diego de Borja y de Castro-Pinós, otro de los hermanos del Maestre y de don Felipe y, como ellos, hermanastro de San Francisco de Borja por un nuevo matrimonio de Juan de Borja y Enríquez con doña Francisca de Castro-Pinós, fue apresado y ahorcado por orden de Felipe II en el castillo de Játiva en 1562<sup>34</sup>. Don Felipe Manuel de Borja correría mejor suerte, pues aunque también fue capturado tras la pendencia, será desterrado a Orán<sup>35</sup>. No hemos podido fijar la fecha exacta en la que llega al presidio, pero lo que sí está claro es que cuando su hermano desembarca para hacerse cargo del gobierno, don Felipe ya ha cumplido con la pena de su destierro a pesar de que permanece en Orán como medida preventiva ante la continuidad de las pendencias entre bandos nobiliarios rivales en Valencia<sup>36</sup>.

Desde esta perspectiva, se puede considerar que el nombramiento de don Pedro Luis Galcerán de Borja como gobernador de Orán y Mazalquivir es, en alguna medida, un honroso destierro para la cabeza principal de los Borja valencianos. El nuevo gobernador acude a las plazas rodeado, muy significativamente, de otros:

<sup>31</sup> Pedro Luis Galcerán de Borja (1528-1592), décimo hijo de Juan de Borja –tercer duque de Gandía– habido de su segunda esposa, doña Francisca de Castro y Pinós, y hermano de padre de San Francisco de Borja. Fue primer marqués de Navarrés, dignidad de Comendador Mayor y Comendador de las Cuevas de Biurromán y último Maestre de la orden de Montesa.

<sup>32</sup> *Ibidem.*, parte I, cap. IX, p. 146.

<sup>33</sup> M. D. SALVADOR LIZONDO., *Los virreinos de los duques de Maqueda y de Segorbe (1553-1563). Configuración del bandolerismo, presión islámica y problemática de sus gobiernos*, Valencia, 1987. Tesis doctoral en microficha.

<sup>34</sup> El propio Maestre de Montesa será investigado por su presunta colaboración en esta pendencia. Don Pedro confiesa que sólo acogió a su hermano en el castillo de Montesa para ocultarle tras el asesinato de don Diego de Aragón. Al no poderse probar su participación directa en el asesinato, el Maestre sólo será multado con mil ducados. (AGS. GA. Leg. 67, fol. 224 / 1558).

<sup>35</sup> Además de su posible participación en el asesinato de don Diego de Aragón, la causa directa del destierro a don Felipe de Borja a Orán tiene más que ver con otro asunto relacionado con la lucha entre bandos nobiliarios rivales en la Valencia de mediados del siglo XVI, como se refiere cuando, en 1573, se discute la posibilidad de permitir que vuelva o no a España: “como V. Md. sabe don Felipe salió destos reynos y se le mandó ir a Orán por lo que en Valencia hizo que fue que estando con un amigo suyo en una pieça le dixo que se pusiese a la ventana y, puestos, el don Felipe azozó una redoma a uno de sus enemigos que estaba en la calle y porque no se le pudiese achacar a el dio boçes y llegando dos o tres criados el y ellos echaron por la ventana abaxo al que estaba con el. El qual por ser cavallero y aver quedado bivo y despues sano le perdono”. AGS. GA. Leg. 77, fol. 81/ s.a.

<sup>36</sup> S. GARCÍA MARTÍNEZ., *Bandolerismo, piratería y control de moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe II*, Valencia, 1977, pp. 21-28; E. GARCÍA HERNÁN., *La acción diplomática de Francisco de Borja al servicio del Pontificado, 1571-1572*, Valencia, 2000; M. BATLLORI., *La familia Borja*, Valencia, 1997; C. de DALMASES., “San Francisco de Borja y la Inquisición española: 1559-1561”, en *Archivum Historicum Societatis Iesu*. Roma, 1972, pp. 48-135.

*"caballeros, sus deudos y amigos de su orden, que eran el comendador don Francisco de Monpalao, el comendador Jaime Juan Falcón, el comendador don García y don Jorge Vique y don Pedro Vique, don Gonzalo Lanzol de Romani, don Jerónimo de Borja, don Jerónimo de Híjar, don Francisco Tallada, don Luis Bou, el comendador don Fernando del Hospital, don Juan Ferrer, y otros muchos caballeros del hábito y religión de Montesa, y otros que, como nobles naturales del famoso reino de Valencia, voluntariamente iban [a] acompañar al Maestre "*<sup>37</sup>.

Mientras el Maestre de Montesa esté en Orán, Felipe II consigue frenar temporalmente los problemas que se están sucediendo en Valencia, al tiempo que don Pedro desempeña una tarea acorde con su rango y preparación en una de las más principales fronteras de la Monarquía. Tras cuatro años de servicio en el doble presidio y ante los deseos del Maestre de regresar a Valencia para hacerse cargo de negocios personales, el monarca negará el permiso una y otra vez hasta que no le quede más remedio que concederle una licencia por cuatro meses. Felipe II permite que D. Pedro ponga en su lugar mientras tanto a quien crea conveniente y el Maestre no desaprovecha la ocasión de perpetuar a su familia al frente del cargo situando a su hermano en el puesto, con lo que él también repite los mismos comportamientos nepotistas que se vienen sucediendo en las plazas desde su conquista:

*"El cual, antes que el Maestre, su hermano, fuese a Orán, había estado desterrado en aquella ciudad, en tiempo de Hernando Tello de Guzmán, y después había estado allí en compañía del mismo Maestre, [...]. Por lo cual, ya tenía experiencia del gobierno de todo y entendía los negocios de aquellas plazas. El cual se hallaba a esta sazón y tiempo en España, donde había pasado pocos días antes a negocios suyos y del Maestre, al cual le escribió que viniese luego a Orán, [a] asistir en su lugar y ausencia "*<sup>38</sup>.

En este acceso temporal al gobierno de una frontera de la Monarquía de alguien que había estado previamente desterrado en ella debemos ver la importancia cualitativa que llega a alcanzar el conocimiento de la vida interior de las plazas en el momento de apoyar el acceso al gobierno de un posible candidato. Pero, sobre todo, hay que entender que a Felipe II sigue sin interesarle que los dos hermanos Borja y todos sus deudos y amigos regresen a la vez a España. De una forma u otra, lo cierto es que los cuatro meses que don Felipe de Borja iba a gobernar interinamente en Orán-Mazalquivir se convierten en más de un año, hasta marzo de 1572, al frente de los destinos del doble presidio. El Maestre de Montesa ya nunca volverá a gobernar Orán, pues llegado a España será acusado de sodomía y acabará cumpliendo pena en las cárceles de la Inquisición de Valencia <sup>39</sup>. Por su parte, don Felipe Manuel de Borja se verá retenido en Orán en contra de su voluntad aun cuando ya está en camino el nuevo gobernador titular del doble presidio, don Diego Fernández de Córdoba, III

<sup>37</sup> Ibidem., parte I, cap. IX, p. 147. Sobre la faceta de D. Pedro Luis Galcerán de Borja como último Maestre de Montesa y el papel de esta orden en la España de Felipe II, véase F. ANDRÉS ROBRES., "Galcerán de Borja, Felipe II y la tardía incorporación del maestrazgo de la Orden de Montesa a la Corona. Los hechos (1492-1592)", en E. MARTÍNEZ RUÍZ y V. SUÁREZ (eds.), *Actas de la III reunión científica de la Asociación de Historia Moderna*, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, vol. I, pp. 409-420; ibidem., "La singularidad de la Hermana Pequeña. Algunas consideraciones sobre el gobierno de la Orden de Montesa y sus relaciones con la Monarquía (siglos XVI-XVII)", *Hispania*, LV/2, núm. 190 (1995), pp. 547-566.

<sup>38</sup> D. SUÁREZ MONTAÑÉS., *Historia del Maestre último ...*, parte II, cap. XXXVIII, fol. 288 v.

<sup>39</sup> R. CARRASCO., *Inquisición y represión sexual en Valencia. Historia de los sodomitas (1566-1785)*, Barcelona, 1985, pp. 195-204. A esta acusación se añadió la de usar su cargo en la Orden de Montesa para favorecer a sus efebos con hábitos y prebendas, por lo que fue condenado por el tribunal de la Inquisición en 1575 a diez años de reclusión en el castillo de Montesa. Todos estos sucesos se relacionan con la persecución a la familia Borja que se realiza a mediados del siglo XVI.

marqués de Comares. El permiso para regresar a España que le pueda ser otorgado por parte de Felipe II depende de cómo haya evolucionado la situación en Valencia, tal como hace saber el monarca a sus consejeros: "Sabed debiades si tiene algun impedimento don felipe para entrar en estos reinos por las cosas de Valencia y si no le tiene podiasele escribir y ver despues lo que se hara con el y si le tiene sabed debiades lo que le pareciera y avisadme-lo"<sup>40</sup>. Finalmente, don Felipe obtiene permiso del marqués de Comares para volver a España en el mismo galeón en que ha llegado al otro lado del Estrecho el nuevo gobernador, pero se estima que no es oportuno que entre en Valencia bajo ningún concepto "hasta que pasase mas tiempo y que seria conviniente mandarle yr a Italia porque quedando en Oran no sabe si se seguiria algun inconviniente"<sup>41</sup>.

Las nuevas causas políticas en las que se va implicando la Monarquía de Felipe II en el transcurso de los años posibilitan la aparición en Orán de desterrados por motivos muy específicos, como es el caso de Juan Ferreira de Guzmán, "hombre noble hijodalgo que siendo moço de diez y siete años fue preso por culpas de la parcialidad de don Antonio prior que fue de Ocrato y sentenciado en diez años de servicio en Oran"<sup>42</sup>. Junto a estos desterrados fruto de las guerras oficiales de la Monarquía, siguen apareciendo delitos de orden menor a nivel interno que también acaban mereciendo la pena de destierro temporal a Orán, como le sucede al capitán de infantería Juan Ordóñez de Gazeta, que ha sido incapaz de controlar los excesos y delitos de sus soldados y para el que el comisario general don Bernardino de Velasco estima oportuna una condena de destierro a un presidio sin sueldo durante cuatro años. Los miembros del Consejo de Guerra creen que se debe aumentar a seis años y, finalmente, Felipe II ordena que "le destierren a Orán por diez años a donde servira sin sueldo y antes que salga de la carcel ha de pagar todos los daños en que ha sido condenado"<sup>43</sup>.

El traslado de los desterrados al norte de África ya constituía en sí mismo toda una peripecia; efectuado generalmente en el bergantín de Orán, nave que realiza la comunicación ordinaria entre el doble presidio y la Península, la travesía podía ser la última oportunidad para los condenados de intentar evitar un destino poco deseable. Juan Muñoz, condenado por la Inquisición de Toledo al destierro en Orán, simula resignación por su futuro, consiguiendo que no se le pongan los grilletes durante la travesía; en cuanto el navío fondea en Escombrera a causa del mal tiempo en el transcurso de la travesía Cartagena-Orán, Muñoz se escapa, y ya nunca cumplirá su destierro<sup>44</sup>.

Para los que sí llegan al presidio, el siguiente paso es presentarse ante el gobernador con la cédula real despachada por el Consejo de Guerra en la que se advierte de cuál ha sido el

<sup>40</sup> AGS. GA. Leg. 77, fol. 158 / s.a. Respuesta de Felipe II al margen de una Consulta del Consejo de Guerra.

<sup>41</sup> AGS. GA. Leg. 79, fol. 126, s.a. Don Felipe Manuel de Borja será nombrado gobernador de Mesina, muriendo en Sicilia en 1581. El papel de Orán como destino de desterrados procedentes del reino de Valencia se perpetuará en la centuria siguiente. El número de los mismos, su calidad y la cualidad del delito por el se les expatria de su tierra de origen obligará a advertir a sus gobernadores en relación con el cuidado que deben tener en la vigilancia de estos desterrados; así se insta, en 1607, al gobernador don Juan Ramírez de Guzmán, marqués de Ardales, "que tenga cuenta con las personas que se le envian condenados a destierro a aquellas plazas del rreyno de valencia y particularmente con Marçello sanchez que yba condenado a servir en ellas toda su vida" (AGS. GA. Leg. 670 / 30 enero 1607). Felipe III insiste al respecto un mes después: "(...) y porque conviene a mi servicio que este ombre no buelva a aquel reyno os encargo que tengais quenta con su guardia y le obliqueis a que cumpla con el tenor de sus sentencia". (AGS. GA. Leg. 675 / 25 febrero 1607).

<sup>42</sup> AGS. GA. Leg. 342, fol. 214 v / 18 octubre 1590. La precaria situación económica en la que se halla al haberle sido tomada toda su hacienda en el momento de la captura le lleva a suplicar "una plaça conforme a la calidad de su persona como se da a otros desterrados que ahí lo estan".

<sup>43</sup> AGS. GA. Leg. 499, fol. 189 / 17 octubre 1597.

<sup>44</sup> AHN. Inquisición. Leg. 2022 / 53, fols. 20 v - 21 r. Año 1637. Relaciones de causas presentadas ante el Santo Oficio de Murcia.

delito y cuál la pena. Si traen consigo penas de multas que aún no han satisfecho, pasarán a ser encerrados en alguna de las torres o castillos de Orán, como le ocurre al capitán don Alonso Ruiz de Alarcón, condenado a seis años de destierro a Orán sin sueldo y a pagar mil ducados de multa. Por esta razón Felipe III solicita al marqués de Ardales que “luego que esta recibais ordeneis al alguacil de la dicha fuerza que le reciba y tenga presso y a buen recaudo al dicho capitán en una de las torres en el inter que tenga testimonio y recaudo bastante de haver pagado los dichos mil ducados y costas de alguaciles y guardas en que esta condenado y que despues (...) le saque de la dicha torre y le tenga en la dicha fuerza en la forma que se suele a los demas prisioneros hasta que asimismo aya cumplido con servir los dichos seis años sin sueldo”<sup>45</sup>. En el caso de que no arrastren multas desde España, su destierro en Orán se cifra en varios años de servicio a la Corona, a través de la figura del gobernador, sin recibir, en principio, al menos, sueldo por él. El concepto de prestar un servicio en unas plazas cuya defensa es especialmente necesaria y compleja está presente siempre en el transcurso de estos destierros, hasta el punto de que cuando el deportado tiene mala salud o una edad avanzada, se contempla su posible salida de las plazas por no ser de servicio ninguno en ellas. Por el contrario, cuando el desterrado ha mostrado una aplicación excepcional en el servicio encomendado y una conducta intachable, puede ser recomendado para que se le saque de las plazas antes de completar su pena. Don Pedro de Orellana, caballero de Trujillo, perteneciente a la insigne familia de los conquistadores de Perú al lado de Francisco Pizarro, es condenado por los alcaldes de casa y corte a ocho años de servicio en Orán, aunque, como en tantos otros casos, la documentación emanada desde el norte de África no refiere la causa de su destierro. Tan sólo unos años después de haber llegado a Orán, el gobernador, D. Francisco de Córdoba y Velasco, recomienda a Felipe III que ejerza sobre él su clemencia ante su buen comportamiento: “sirve sin aver faltado a ninguna de las ocasiones que se han ofrecido hasta agora y por esto y no aver parte en su negocio me a parecido supplicar a V.M. use de su real clemencia con el mandandole dar licencia para pasar a España con que no entre en su tierra en los ocho años que avia de servir aqui”<sup>46</sup>.

Sin embargo, actitudes como la de don Pedro de Orellana no son todo lo frecuentes que los gobernadores de Orán y la propia Corona hubieran deseado, sobre todo en virtud de la ya de por sí difícil continuidad en manos españolas de unas plazas que quedan a merced de muchos inconvenientes pocos años después de la conquista. En ocasiones, se denuncia desde dentro de la ciudad de Orán comportamientos que están manteniendo algunos nobles allí deportados que están contribuyendo a alterar el ritmo normal de una vida cotidiana que ya tiene bastantes sobresaltos. El conde de Alcaudete, don Francisco Fernández de Córdoba, denuncia, en 1596, al desterrado don Álvaro Osorio “que por sus ynquietudes y mal proceder es todo temo algun mal suceso en su persona, por lo que supplico a V.M. considerando esto se sirva de mandar sacarle de aquí por ser lo que conviene a su real servicio”. La pendencia por la que el gobernador quiere que se aleje lo antes posible de Orán le relaciona con un enfrentamiento directo que Osorio ha tenido a los dos años de llegar a la plaza con Gaspar de Moscoso, mercader valenciano también desterrado en esta urbe. Osorio queda ence-

<sup>45</sup> AGS. GA. Leg. 675, s.f. / 24 enero 1607.

<sup>46</sup> AGS. GA. Leg. 564, s.f. / 13 febrero 1600. Pero don Pedro de Orellana no obtendrá la merced real para salir de Orán. En 1602, junto a don Diego de Portugal, se queja ante Felipe III de que las malas relaciones que tienen con el gobernador les han llevado a verse obligados a servir debajo de estandarte, ante lo que supplica al monarca que “mande al dicho conde que los trate como a cavalleros de la sangre y calidad que son y que con ellos se haga lo que con los demas desterrados se ha hecho y haze y que no los mande asentar plazas, sino que sirban cerca de su persona y no mas, como hazen todos los desterrados a la dicha plaza”. (AGS. GA. Leg. 599, s.f. / 1602).

rrado en uno de los castillos de Orán, mientras que a Álvaro Osorio se le confina en un monasterio de este presidio. Tras no apreciarse indicios de culpabilidad en ninguno de ellos, los dos quedan en libertad, pero Osorio teme que lleguen en las galeras "algunos deudos del dicho moscoso"<sup>47</sup>. Más grave es aún el caso de don Francisco Pie de Concha, genealogista del Consejo de Órdenes Militares<sup>48</sup>, que aparece ya desterrado en Orán en 1610 por orden de Felipe III. Sus problemas de conducta y enfrentamientos directos con el vicario de Orán le han llevado a ser encerrado en el castillo de Santa Cruz, pero no es solución porque "es ombre tan escandalosso y libre que no ay dia que no da ocasiones con sus palabras y escritos a ser castigado", llevando al gobernador, D. Felipe Ramírez de Arellano, conde de Aguilar, a sugerir sea echado en galeras o enviado al Peñón de Vélez de la Gomera<sup>49</sup>. Las quejas del gobernador llegan a su máxima expresión un año después, señalando los graves perjuicios que un comportamiento semejante puede tener en un enclave de frontera:

*"(...) y aunque ay cuidado para no dejarle escrebir como se tiene ordenado no deja de açello ni de persuadir a los soldados la sin justia que le parece que con el se açe hablando con tanta libertas y atrebimiento que se puede juzgar no abra ninguna maldad que no yntente de suerte que son mucho mayores los delitos que en rraçon de escrebir y hablar comete cada dia que los principales porque esta presso y aunque sse y el mismo se jata de que escribe cartas a V.M. algunas en su nombre y otras en el de otros onbres deste lugar sin sabiduria dellos ablando de mi como siempre a echo de perssonas como yo no me da cuidado por ser a V.M. a quien las escribe (...) V.M. me aga merçed de mandar ssacar a este onbre de aquí que tan perjudicial es donde quiera que esta pinci-palmente en tierra tan corta y gente tan façil como la africana y él tan enemigo de todo bien y quietud y de un ingenio tan perberso que persuadira con façilidad a gente semejante a su opinion"*<sup>50</sup>.

Las demandas contra él no cesan: blasfema contra los altos cargos de la ciudad, violenta mujeres honradas, y el gobernador, viendo que no se le permite sacarle de Orán, pide para él el garrote<sup>51</sup>. En 1617 el nuevo gobernador, Don Jorge de Cárdenas Manrique, duque de Maqueda, refiere la penosa situación en la que ha encontrado a su llegada al reo, pues lleva a pan y agua mucho tiempo. Le traslada del castillo de Santa Cruz al de San Felipe y sigue preguntando a Felipe III qué hace con él<sup>52</sup>.

Situaciones como la que protagoniza Pie de Concha no evitaron a Orán el papel de destino de desterrados de elevada extracción social. Pero los problemas que podían llegar a generar hicieron alzarse voces desde dentro y fuera de las plazas favorables a la restricción de este mecanismo de deportación o, al menos, a realizarlo dentro de unos estrictos límites que

<sup>47</sup> AGS. GA. Leg. 456, fol. 86 / 24 junio 1596, y AGS. GA. Leg. 459, fol. 224 / 16 septiembre 1596. La pen-dencia entre ambos caballeros había tenido lugar durante el gobierno en interinidad del antecesor del conde de Alcaudete, don Gabriel Niño de Zúñiga.

<sup>48</sup> Sobre la figura y excepcional biblioteca de este controvertido noble alcarreño, y su rigurosa labor para el Consejo de Órdenes, vid. V. MORENO GALLEGÓ, "Sangre y tinta. Linajes y libros en el genealogista Pie de Concha (1600): En torno a un índice de procedencias", en *El Libro antiguo español*. Madrid, 2001 (en prensa), a cuyo autor agradezco la información sobre Francisco Pie de Concha. Sobre los problemas genera-dos en el acceso al Consejo de Órdenes en relación con las pruebas realizadas a los pretendientes, vid. E. POSTIGO, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII*. Valladolid, 1988, pp. 144-155.

<sup>49</sup> AGS. GA. Leg. 758, s.f. / 24 febrero 1611.

<sup>50</sup> AGS. GA. Leg. 771, s.f. / 3 mayo 1612. El Consejo de Guerra no cede a las peticiones del gobernador: "que él [el conde de Aguilar] le apriete la prision de manera que no escriba no hable con nadie y encargue la guarda a persona de quien tenga mucha satisfaction".

<sup>51</sup> AGS. GA. Leg. 804, s.f. / 15 septiembre 1615.

<sup>52</sup> AGS. GA. Leg. 825, s.f. / 5 enero 1617.

evitaran que unas plazas que ya tenían serios problemas para su defensa y mantenimiento aún quedaran más minadas desde dentro por "gente inquieta y facinorosa", a la que era complicado controlar, al no estar obligados a sentar plaza en la guarnición. Para ellos pide Arias Temprado a la Corona que, si no quedaba otro remedio que desterrarlos allí, al menos sirvieran como parte de la infantería o caballería de Orán, nunca de Mazalquivir, cuya defensa debía estar encargada a la gente mejor cualificada<sup>53</sup>.

El análisis de las pautas y especificidades del gobierno en Orán y Mazalquivir en los dos primeros siglos de la Edad Moderna se puede realizar, según la opción seguida por la historiografía tradicional, como un elemento aislado de la historia de la administración hispana. Sin embargo, según ha mostrado el estudio de los desterrados y de la evolución de la figura del gobernador referida en estas páginas, se adecua de manera bastante evidente a la propia evolución de los engranajes del poder que se advierten en la metrópoli en estas mismas centurias. Virreyes y exiliados pertenecen a las más altas clases nobiliarias del momento y, en muchos casos, los apellidos coinciden con los de quienes asesoran a los diferentes monarcas en los consejos y cargos de relevancia de la Monarquía Hispánica, si bien nuestro análisis se ha centrado exclusivamente en el perímetro del doble presidio sin realizar las concomitancias evidentes que se producen con Madrid o Valladolid, objetivo no propuesto en la presente comunicación. En el caso magrebí priman más los intereses de sangre, la perpetuación de unos cargos que lustran y dan prestigio y dinero a los linajes que los sustentan, que los posibles partidos con que la historiografía ha tendido a analizar en los últimos años la vida de corte. Las designaciones y prebendas concedidas, que en un principio podían suponer la victoria cortesana de unos partidos sobre otros, se topan con la cruda realidad de la subsistencia en una frontera real. Los honores van cediendo paso a la corrupción que provoca la propia supervivencia, desvirtuando gran parte de la contienda política que podía haber fijado la designación de las personas que detentan el cargo de gobernador. El gran problema que queda por solventar en este panorama es la denominación de "Corte Chica", que aparece frecuentemente en la documentación que subsiste de la nobleza exiliada en el Magreb. En la época de los Austrias, en contraposición con la de los Borbones, "Corte Chica" tiene más que ver con la pervivencia de privilegios en un espacio excepcional que con la asunción de los modos y prerrogativas cortesanos. En conclusión, el análisis de elementos periféricos o de áreas periféricas puede ser la mejor manera de entender la praxis cortesana de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna, como hemos intentado fijar en sus caracteres generales en estas breves páginas.

---

<sup>53</sup> P. ARIAS TEMPRADO., op. cit., apuntamiento núm. 96, fol. 40 r.

## GRACIA Y MERCED EN ÉPOCA DE DESGRACIAS. CÁMARA, Y VIDA COTIDIANA EN EL REINADO DE CARLOS II.

Jesús Bravo Lozano

Universidad Autónoma de Madrid

La concesión de gracias y mercedes es una de las regalías reconocidas al rey<sup>1</sup>. La clásica metáfora de la fuente de donde dimanaban todos los bienes arranca de nuestra vieja cultura tan vinculada al desierto. Contra la esterilidad, el agua que mana, corre y fertiliza. Moisés con su vara golpea la roca y hace brotar raudales de agua para saciar la sed de su pueblo crítico y desconfiado y así ganar su confianza y poderle guiar a la tierra prometida<sup>2</sup>.

El rey guía a su pueblo con la ley, le protege con la ley. Pero es un oficio muy cansado, según Guzmán de Alfarache<sup>3</sup>, pues el rey vela mientras todos descansan. Una de las preocupaciones del rey es cómo premiar y estimular a sus súbditos concediéndoles muestras de su benevolencia en forma de oficios, cargos, pensiones, distinciones, preeminencias, franquicias, libertades, exenciones y honores. Así que la gracia real se constituye en un mecanismo de integración del Reino. A partir de 1588 es la Cámara de Castilla el órgano especializado en administrar la gracia real<sup>4</sup>.

La polivalencia de los términos gracia y merced junto con la falta de noticias ciertas sobre la fundación de la Cámara llevó a interpretaciones maximalistas, como la de Garma Durán en el siglo XVIII:

*"Es antiquíssima esta Secretaría en su origen, tanto que no hay otra que le iguale, pues fue la única que se conoció en Castilla, y assi los negocios que se despachavan por ella abrazavan y comprehendían todos los de la Corona, hasta que eregidos los Consejos y Tribunales se les aplicó los de su cargo, quedando por la formación de la Cámara dividida en dos secretarías, una con los despachos de Mercedes de Gracia, y otra con el de los empleos de Justicia..."*<sup>5</sup>.

¿Es lo mismo gracia que merced? Las definiciones al uso distinguen suficientemente una de otra. Según Covarrubias, "Merced" es "*galardón que a uno se le deve por su trabajo, y assi llamamos mercenarios a los trabajadores*", mientras que "Gracia" es el "*beneficio que hacemos o el que recibimos*", entendiendo por beneficio "*el bien que uno haze a otro, quaedam benevola actio, tribuens gaudium capienti*". El gozo de recibir se corresponde con la acción benevolente, graciosa. Por esa deriva gozosa, Covarrubias llega a definir "*mercedes: las gracias y las dádivas que los príncipes hazen a sus vasallos, y las que los señores hazen a sus criados y a otras personas. Finalmente, qualquier cosa que se da graciosa, se*

<sup>1</sup> S. de DIOS., *Gracia, Merced y Patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530*, Madrid, 1993, p. 265.

<sup>2</sup> Éxodo, cap. 17.

<sup>3</sup> M. ALEMÁN., *Guzmán de Alfarache*, I, libro 2º, cap. 5, p. 294. (Se cita por la edición de F. RICO) Barcelona, 1983.

<sup>4</sup> I EZQUERRA., *Justicia y gobierno en el siglo XVI. El Consejo Real de Castilla durante el reinado de Felipe II (1556-1598)*, Tesis doctoral inédita. UAM, 1999. Un estudio general de la Cámara en S. de DIOS., *Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla en 1474-1530*, op. cit. Mª J. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ (dir.è int.), *La Cámara de Castilla. Inventario de los libros de la Secretaría de Gracia y Justicia que se conservan en el Archivo Histórico Nacional*, Madrid, 1993. Para los orígenes y evolución de la Cámara, ver S. de DIOS., op. cit., pp. 32-33.

<sup>5</sup> Apud Mª J. GONZÁLEZ-COCA ÁLVAREZ., op. cit., p. 35, nota 75.

recibe por merced"<sup>6</sup>. Una breve reflexión. "Gracia", como tantos otros, es primariamente un concepto teológico que cobra nuevo vigor en la "Europa de las Cortes", coetánea de las discusiones del Concilio de Trento y marcada por ellas. Covarrubias tiene una entrada para este concepto teológico, aunque lo despacha rápidamente con un "*consule scholasticos*"<sup>7</sup>. Pero a toda la documentación que luego se expondrá se le puede aplicar al por menor las categorías de la "Gracia": hay una gracia "*sufficiens*", otra "*efficax*", en ocasiones la gracia es "*ex opere operato*" en otras "*ex opere operantis*" y se manifiesta a través de símbolos sensibles o "*sacramentos*". ¿Produce la "salvación" "*ante praevisa merita*" o "*Post praevisa merita*"? Gratia "*gratis data*..."<sup>8</sup>.

La presencia de este vocabulario desborda en toda clase de documentos, incluidos los de contenido más nítidamente económico, como la constitución de censos. En los Protocolos Notariales de Madrid tales documentos contienen invariablemente la fórmula "*por me hacer merced y buena obra*", motivo único para la concesión del crédito sin que del documento se puedan deducir cuales eran las necesidades concretas que impulsan a pedir dinero a crédito.<sup>9</sup> Una simple vista por cualquier obra literaria resalta, así mismo, la presencia de los términos "merced", "servicio" y otros similares. Por lo que se refiere al Quijote, abundan las frases con el contenido de hacer merced, recibir por merced, merced muy particular, etc, con el sentido de gratuidad. "*Hacerme merced sin yo merecerla*", dice D. Quijote a la duquesa cuando le ofrece que le sirvan en su cámara "*cuatro doncellas de las mías, hermosas como las flores*". Poco antes, Sancho ha tenido una expresión similar: "*de grandes señores, grandes mercedes se esperan*"<sup>10</sup>. Recientemente se ha aprendido a valorar los términos de merced y gracia en su función de vertebradores de las relaciones sociales de la época. Clavero habla de "Antidora", la cotidianeidad del dar y recibir graciosamente cobra sentido en la familia y la *oeconomia*, que priman sobre el derecho:

*"Todo era inicialmente gracia, favor religioso, todo es finalmente antidora, obligación natural. las obligaciones naturales, no jurídicas, eran entonces fundamentales, no complementarias ni residuales. Lo secundario resultaba el vínculo contractual"*<sup>11</sup>,

y Hespánha pretende integrar el Derecho en un sistema de valores que tienen como raíz la gracia<sup>12</sup>.

El ejercicio de la gracia, como todo acto voluntario del rey, está sometido a normas que impiden se le pueda tildar de arbitrario, debe caer en el campo de lo justo y no afectar o

<sup>6</sup> S. de COVARRUBIAS., *Tesoro de la lengua castellana o española* ..., Madrid, 1661. Edición facsímil a cargo de M. de RÍQUER, Barcelona, 1994. pp. 652-653, 800. Los mismos sentidos podemos encontrar 120 años más tarde en el *Diccionario de Autoridades*: "*Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad ... Compuesto por la Real Academia Española*", Madrid, 1732. Ed facsímil. Madrid, 1979. t. III, Términos "Gracia y Merced". Textos literarios, o administrativos, emanados de la Cámara, nos dicen al respecto mucho más que estas escuetas definiciones.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> La aproximación entre lenguaje teológico y práctica de la gracia por parte de los reyes no es una novedad. "los juristas -dice Martínez Millán- propusieron un arsenal de tecnicismos y de modelos de organización (a menudo prestados de la tradición eclesiástica ...", refiriéndose a la baja edad media. Ver J. MARTÍNEZ MILLÁN., "La integración de las elites sociales en las monarquías dinásticas a través de relaciones no institucionales". (en prensa).

<sup>9</sup> AHPM, (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid), cualquier libro, cualquier año.

<sup>10</sup> M. de CERVANTES., *Don Quijote de la Mancha*, (Ed. del Instituto de Estudios Cervantinos, dirigida por F. RICO) Barcelona, 1998. II, cap. 44, p. 982 y II, cap. 32, p. 903.

<sup>11</sup> B. CLAVERO., *Antidora. Antropología Católica de la Economía Moderna*, Milano, 1991, p. 211.

<sup>12</sup> A. M. HESPANHA., *La Gracia del Derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Madrid, 1993.



perjudicar el derecho de terceros, ni, por supuesto, los derechos de la Corona; tales limitaciones quedan fielmente recogidas en todas las concesiones de gracias y mercedes. Salvando estas limitaciones, anteriores a todo derecho positivo, el ejercicio de la concesión de gracias y mercedes no obedece a ningún criterio especial de regularidad y, aunque en buena lógica, la concesión de mercedes debería tener un flujo constante como elemento del buen gobierno, existen momentos o circunstancias en que las concesiones reales brotan incontenibles porque obedecen a una lógica de desmovilizar disidencias. Así tenemos un Enrique II “el de las mercedes”.<sup>13</sup> Por ello los súbditos con frecuencia tenían la percepción de que los reyes eran generosos y liberales en exceso, rozando los límites de la justicia distributiva y poniendo en peligro la hacienda real. Tal estado de cosas provocó discretas y leales llamadas de atención por parte del Consejo de Castilla. No debieron de surtir efecto si se tiene en cuenta su reiteración.

Es bien conocida la Consulta de febrero de 1619, y la glosa que de ella hace Fernández Navarrete poco tiempo después<sup>14</sup>, se trata de un serio aviso sobre el particular, del que entresacamos algunos párrafos. El Consejo acepta la relación del rey con sus vasallos a través de la gracia y la merced:

*“Y tanto más en V.Md q sin tocar en su real hazienda, y en la de sus vasallos, tiene otras muchas cosas de q poder hazer m(erze)d, quales no las ha tenido ni tiene Principe ni Monarca del mundo, como son officios temporales, plaças de asiento, hábitos, encomiendas, títulos, obispados, Arzobispados y otras prevendas eclesiásticas, q como todo esto q es sin núm(er)o en esta Corona de Castilla, y en los demás Reynos agregados a ella, y en lo restante desta monarquía, se distribuyese con igualdad, tendria V.Md de dos maneras contentos a sus vasallos; razón de estado bien importante, la una con las mercedes que recibiesen deste género, y la otra con el alivio de los tributos q de acortar la mano en los demasiados gastos y extraordinarias m(erce)d(e)s se les seguirian ...”*

El Consejo ha estudiado el asunto en pleno y propone medidas:

*“q V Md se sirva de mandar reveer las m(erce)d(e)s más considerables y quantiosas q ha hecho desde el primer día de su Corona, hasta este, para qu si se hallaren algunas inoficiosas -así las llama el derecho- inmensas e inmoderadas, V Md las reboque todas, o reforme, así las de dinero, como de rentas de por vida o perpetuas, así la hechas en este Reyno de Castilla como en las Indias y en las demás Provincias sujetas a V Md, porque se entiende que han sido muchas y muy excesivas , y que podrian haverse ganado por importunidad y medios extraordinarios de los suplicantes, o con falsa relación de servicios ningunos, o si algunos, inferiores a ellas ...”*

<sup>13</sup> “Don Enrique el segundo ... fue hombre muy agraciado y de muchas prendas, sobre todo liberalísimo, lo qual se atribuye o a su condición natural, o la necesidad por contentar a los que le avían ayudado a ganar el reyno”. S. de COVARRUBIAS., *Suplemento al Tesoro de la Lengua Española Castellana*, Ed. de G. DOPICO y J. LEZRA., Madrid, 2001, p. 215.

<sup>14</sup> Texto de la Consulta en una copia de la BNM. Ms, núm. 3207, fols 49 a 67. P. FERNÁNDEZ NAVARRETE., *Conservación de Monarquías*, Madrid, 1626. Durante muchos años la consulta solo se podía estudiar en la edición de la BAE, t. XXV. Más reciente es el estudio a cargo de M. D. GORDON sobre la obra de P. FERNÁNDEZ NAVARRETE., *Conservación de Monarquías y discursos políticos*, Madrid, 1982. (Se debía haber cuidado el castellano del estudio preliminar). Bien conocía el tema nuestro autor, que disfrutó de un título de secretario de la Reina, desde enero de 1615 hasta su muerte en 13 de marzo de 1632. AGP. Sección personal, caja 935/7. Apud J. A. ESCUDERO., *Los Secretarios de Estado y de Despacho*, Madrid, t. III, doc. 70, pp. 717-718.

Aprovecha a continuación para dar doctrina al respecto, proponiendo que, si algo de eso ha sucedido, tales mercedes deben retornar al Patrimonio Real:

*“bien assi como hechas en perjuicio del bien común a q V.Md deve principalmente atender con indispensable necesidad, assi de justicia, como de conciencia”.*

El Consejo hace un recorrido circular y termina donde ha empezado:

*“V Md se servirá d yrse muy a la mano en las m(erce)d(e)s y donaciones q ha hecho y hace, y en las ayudas de costa q ha dado, porq lo q se da a unos se quita a muchos ... y aunq es cierto q no hay cosa con q los Príncipes se hagan más amables a los suyos q con la liberalidad, esto se ha de entender dentro de los límites y templanza devida ...”<sup>15</sup>.*

Es menos conocida la propuesta del Consejo de 1681, de revocar todas las mercedes hechas desde el principio del reinado de Felipe III, en Castilla, Indias y los demás territorios de la monarquía, alegando que “las más (de ellas) han sido obtenidas por importunidad y negociación” y, aunque se hayan aducido servicios para conseguirlas “estos no los califican por la grande facilidad que hay en las secretarías y oficios por donde pasan de expresar servicios que no tienen la debida comprobación, con que no solo quitan la sustancia a los Reinos, sino también el aliento a los vasallos beneméritos que ven se aumentan otros sin trabajo, quedando ellos sin el fruto de los suyos”<sup>16</sup>. Esta propuesta confirma dos extremos: uno, que el Rey gobierna sus territorios repartiendo mercedes; otro que la misma abundancia de mercedes dificulta el buen gobierno, al menos según el leal parecer del Consejo, aunque tal parecer esté encubriendo otros fines. En 1683, el Consejo intuye que se está produciendo un distanciamiento, un “paulatino desligamiento entre la figura del príncipe y dichos tribunales”, debido a que el rey hace mercedes excesivas antes que pagar el salario a los Consejeros.

Después de esta somera introducción es el momento de preguntarse si la etapa final del siglo XVII añade algo al tema de la dispensación de la gracia real.<sup>17</sup> Cabe preguntarse si la reconocida incapacidad de Carlos II para el gobierno día a día<sup>18</sup> se suplió con una super-

<sup>15</sup> Los párrafos transcritos se contienen en el fol. 53. El contenido “reformista” de la consulta, no es incompatible con una visión “política” del texto: El Consejo estaría planteando a Felipe III una crítica de fondo a su modo de gobierno a través de Lerma y sus hechuras, propugnando un cambio radical que pasaba por recuperar el papel de los Consejos Reales como único medio de restaurar la armonía en la “república” y el poderío de la monarquía. A. FEROS., *Kingship and Favouritism in the Spain of Philip III, 1598-1621*, Cambridge, 2000, pp. 249-251.

<sup>16</sup> BNM. Ms. 1.322. La referencia está tomada de: B. CÁRCELES DE GEA., “La crisis de la monarquía judicial: La consulta del Consejo de Castilla de 1683”, en *Norba Revista de Historia*, núm. 5 (1984). Por lo que se refiere a las Indias, bastará con repasar los Protocolos Notariales del escribano Viana Morales referentes a las décadas de 1670, 1680 y 1690. Allí se recogen las relaciones de un agente de la Corte, Diego Ignacio de Córdoba, con sus corresponsales en todas las Indias. El agente recibe dinero de todas partes para gestionar toda clase de mercedes, desde hábitos de las Órdenes Militares a la compra de cargos municipales pasando por la compra de títulos y cargos en las Flotas y Galeones. AHPM. Libro 8516 y ss. *passim*.

<sup>17</sup> Al menos cabe pensar que los sucesivos gobiernos de Carlos II fueron conscientes de lo que pasaba y procuraron reordenar todo lo concerniente a la gracia y merced real. Ver *Novísima Recopilación*, libro III, título V, ley XIX, que regula toda la práctica de concesión de mercedes y establece los requisitos de los memoriales de pretendientes. Tal ley recoge los decretos de 23 de mayo de 1667, 23 de febrero de 1680, 27 de julio de 1683, 5 de junio de 1685, 31 de julio de 1692 y, finalmente, 4 de febrero de 1700.

<sup>18</sup> Con precisión aborda estos temas Antonio Álvarez-Ossorio Alvariffo, discutiendo por las diversas posibilidades del reinado y del rey: “Rey aparente” ¿rex inutilis?, “rey niño”, “rey hechizado”, “rey

abundancia de gracias y mercedes a fin de mantener la cohesión social en Castilla. Cabría aún otro enfoque, la abundancia de gracias y mercedes obedeció más que a la debilidad real al poderío político de otros personajes de la Corte. Esta versión, aceptada generalmente, se alimenta de la información manejada por el duque de Maura en su biografía de Carlos II. Por ella desfilan tres reinas, -reina madre y dos esposas- con peso político propio y los grandes patronos cortesanos a su sombra<sup>19</sup>. Implícita en la obra está la crítica a una nobleza antigua incapaz de desempeñar una función política digna, y en esta condena se incluye a toda la "corte" como metáfora de vanidad y vacío. Actualmente los análisis sobre la "corte", entendida en su sentido pleno, como el conjunto de la Casa real, los Tribunales Reales, los Consejos y los cortesanos, resaltan su función política y el ejercicio del poder y su distribución a través del patronazgo, el clientelismo y los cambiantes alineamientos de los cortesanos motivados por lógicas personales<sup>20</sup>.

Tal panorama le permitió a Henry Kamen omitir cualquier referencia al rey en el título de su obra en inglés sobre esta época<sup>21</sup>, aunque la edición española se titule más tradicionalmente "La España de Carlos II". Ignacio Atienza prefiere hablar de "refeudalización" y Yun Casalilla, en cambio, adopta el concepto de "ofensiva política" de la nobleza<sup>22</sup>. En cualquiera de las hipótesis planteadas se argumenta sobre la base de concesión de gracias y mercedes de todo tipo, a favor de los mayorazgos y la alta nobleza titulada.

Ahora bien, tan importante como estas concesiones, es la argumentación de que van precedidas, la estereotipada frase "*de mi propio motu, ciencia cierta y poderío real absoluto, de que en esta parte quiero usar y uso como rey y señor natural, no reconociendo superior en lo temporal, doy y concedo licencia y facultad ...*"<sup>23</sup>. El noble consigue sus objetivos económico-sociales a cambio de que se le recuerde su condición de servidor y su dependencia de quien, realmente, es la fuente del poder y la gracia.

---

prisionero". En relación con la concesión de gracias y mercedes. A. ÁLVAREZ-OSSORIO, "El favor real: liberalidad del príncipe y jerarquía de la República (1665-1700)", en Ch. CONTINISIO y C. MOZZARELLI, *Repubblica e virtù. Pensiero politico e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo*, Milano, 1995, pp. 393-453. Comparar con nota precedente.

<sup>19</sup> DUQUE DE MAURA., *Vida y reinado de Carlos II*, Madrid, 1990. Passim. Al fin y al cabo es la visión de un cortesano y buen político. Contrasta, por supuesto, con la visión de su hermano, Miguel Maura, quien recomendaba al posible nuevo rey que no viviera jamás en el Palacio de Oriente y que se rodeara de la mesocracia. M. MAURA., *Así cayó Alfonso XIII*, Barcelona, 1968, epílogo.

<sup>20</sup> Es éste el sentido de los trabajos de José Martínez Millán y su equipo en sus obras de estos últimos años. J. MARTÍNEZ MILLÁN., *La Corte de Carlos V*, 5 vols. Madrid, 2000; L. CABRERA DE CÓRDOBA, *Historia de Felipe II, rey de España*, (ed., de J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. J. DE CARLOS., Salamanca, 1998, 3 vols.) Una visión sintética del tema del mismo autor: "La integración de las elites sociales en las monarquías dinásticas a través de relaciones no institucionales", de próxima aparición.

<sup>21</sup> H. KAMEN., *Spain in the later seventeenth Century, 1665-1700*, Londres, 1980.

<sup>22</sup> I. A. A. THOMPSON y B. YUN CASALILLA (eds.), *The Castilian Crisis of the seventeenth Century. New perspectives on the economic and social history of Seventeenth-Century Spain*, Cambridge, 1994. Capítulos 12 y 13 Este último se recoge en B. YUN CASALILLA., *La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVIII)*, Madrid, 2002, cap. 7.

<sup>23</sup> Tal fórmula puede revestir pequeñas variantes, la que aquí se reproduce procede de las concesiones para cambiar las condiciones de los mayorazgos, recogida en cualquiera de los legajos manejados, a saber: AHN. Consejos, libros 7600 a 7605, inclusivos, que contienen el Registro General del Sello entre los meses de septiembre-octubre a julio-agosto del año 1698-1699. Según M. J. ÁLVAREZ-COCA., op. cit., el Registro General del Sello de Corte era una institución dependiente de la Cámara, p. 38. Para Yun Casalilla tal fórmula solamente recubre una realidad más política: la convergencia de intereses nobiliarios dentro del proceso de fortalecimiento del absolutismo, la aproximación de la nobleza a la corona como medio para superar la "crisis de la aristocracia".

## 1. La documentación en números.

Estas consideraciones generales aclaran el sentido de los documentos que se presentan en este trabajo. Se trata de un estudio sobre el Registro General del Sello de Castilla en los 12 meses que van de septiembre-octubre de 1698 a julio-agosto de 1699, en que es dado observar los resultados del funcionamiento de la Cámara. Aunque se trata de un sondeo limitado en el tiempo, las características de esta documentación administrativa denotan su absoluta normalidad y normatividad, pues antes y después de la fecha elegida los contenidos serán idénticos en su estructura<sup>24</sup> como se puede comprobar leyendo, y se ha hecho, los legajos correspondientes a los años 1694, 1695, 1696, 1697 y los ocho primeros meses de 1698.

De septiembre de 1698 a fin de agosto de 1699 se anotan los siguientes nombramientos:

- 136 “notarías de los reinos”
- 185 regidurías, veinticuatrías, juradurías o asimilados (“fiel ejecutor con voz y voto de regidor”...)
- 113 escribanías (del número, de millones, del concejo, etc...)
- 22 “contadores” (9 en poblaciones y 12 en instituciones diferentes)
- 32 secretarios de Su Majestad “ad honorem”
- 52 procuradores (diversas denominaciones y contenidos)
- 15 títulos del Consejo de Hacienda (con ejercicio o tan solo “ad honorem”)
- 14 oficios en Chancillerías, Audiencias, Adelantamientos
- 20 mercedes para operaciones financieras sobre mayorazgos (subrogación de censos, otros)
- 16 alguaciles (varias denominaciones) y similares (guarda mayor del Soto de Roma)
- 69 nombramientos eclesiásticos (capellanías, canonjías, raciones, beneficios, obispados...)
- 14 corregidores
- 3 fiscales (de poblaciones)
- 13 otros oficios municipales
- 14 documentos en relación con situaciones personales (“naturaleza”, legitimación, venia, hidalguía, un título de *espargirico mayor*<sup>25</sup>)
- 7 perdones, la mayoría de Viernes Santo.

La suma total es de 725 anotaciones, que daría un promedio de casi 2 por día<sup>26</sup>.

Dando un paso más, los documentos que recogen las competencias de la Cámara sólo plantean una pregunta, en negativo ¿hay algún mínimo reducto de la vida que escape a

<sup>24</sup> AHN. Consejos, libros 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605. Cada legajo comprende dos meses: septiembre-octubre, noviembre-diciembre, etc. Para los años de 1694 en adelante los legajos correspondientes arrancan de la signatura 7572 y llegan hasta el 7599, meses de julio-agosto de 1698. Todos estos legajos han sido anotados desde otros intereses investigadores.

<sup>25</sup> “Espargirico (espargirico en el texto)”: Se aplicaba a ciertos medicamentos preparados con sustancias minerales, a los conocedores de su preparación y a los partidarios de su empleo. M. MOLINER., *Diccionario de uso del Español*, Madrid, 1992, t. I, p. 1198.

<sup>26</sup> Aún quedan otros ítem de menor importancia, como concesión de naturaleza en estos Reinos que, en años de guerra con Francia, aumentan notablemente.

algún tipo de gracia o merced?. Es lógico que el *pater familias* lo prevea todo, lo provea todo, lo enderece todo, lo subsane todo, y así un sin fin de todos.

Esta apariencia de totalidad se ve respaldada por los listados de competencias de la Cámara. El primero listado procede del conde de Chinchón encabezado así "*Las más de las cosas que en el Consejo de la Cámara se proveen ordinaria y estraordinariamente en ausencia de Su Magestad*" <sup>27</sup> comprende 42 capítulos generales, más luego una "*Tabla de lo que se despacha en Consejo de Cámara*" con 8 epígrafes (lo eclesiástico, oficios seculares, legitimaciones y otros suplementos, de yn foro consciencia, remisiones de muertes y mercedes de maravedís y otras mercedes, facultades, lo de Guipúzcoa y Vizcaya, lo de Navarra, Órdenes) y 267 casos, algunos a su vez admiten nuevas divisiones. El apartado de Oficios seculares, por ejemplo, se pormenoriza así:

- Títulos de Grandes y Señores
- De presidentes, oydores, fiscales, secretarios y otros officios de los consejos y chancillerías
- Alcaydías y otros officios de justicia que son perpetuos
- Veyntiquatruas, regimientos, juradurías, scrivánias y otros officios de las comunidades y ayuntamientos de pueblos
- Contadurías mayores y menores de los tribunales de Corte
- Officios de guardas mayores de montes
- Alguaziladgos mayores y menores de Corte y fuera della
- Facultades para renunciar regimientos y otros officios
- Facultades a los señores para perpetuar regimientos en sus tierras
- Guardas de las capillas reales
- Conservaduría del studio de Salamanca
- Adelantamientos, merindades y prebostados, mayordomías y otros officios perpetuos
- Alferazgos, mayoralías de hospitales, mayordomías, thesorerías en casas de moneda y otros officios semejantes
- Notaría mayor del Reino de Castilla y todo género de suerte de scrivánias.
- Asientos de coronistas, aposentadores, predicadores, monteros, capellanes, porteros de Cámara y otros officios de Corte
- Corregimientos, juezes de residencia, prorrogaciones y otros officios de justicia
- Manpastores de Sant Lázaro
- Cédula de caça mayor y menor
- Governaciones de provincias
- Que un pleito sea por dos salas
- Licencia para que uno pueda usar un officio por otro

---

<sup>27</sup> J. MARTÍNEZ MILLÁN., "Las luchas por la administración de la gracia en el reinado de Felipe II. La reforma de la Cámara de Castilla, 1580-1593", en *Annali di Storia Moderna e Contemporánea*, anno 4 (1998) pp. 31-73.

Las relaciones que recogen José A. Escudero y M<sup>a</sup> J. Álvarez-Coca, no hacen sino ampliar los contenidos y las aplicaciones cada vez más individualizadas, de manera que tales listados se asemejan a una red de malla fina, que atrapa hasta los mínimos acontecimientos: todo es gracia y merced<sup>28</sup>. El mismo recopilador sintetiza su enumeración con estas frases:

*"Todo lo referido es lo que se ha podido reducir a expresión formal de lo que se despacha y maneja por esta Secretaría, pero no es posible especificar lo que comprende el todo de lo que es ... porque siendo ... instituido (El C. de la Cámara) para la administración de todas las materias negocios de gracias que conzede S.M., con dispensación de las leyes y pragmáticas de estos Reynos, y habiéndose al mismo tiempo creado esta Secretaría sola para dicho Consejo ... se reconoce la generalidad que comprenderá en ello y que todo lo que no tiene Secretario conocido ... toca y pertenece a esta Secretaría ... en tales términos que por la substancia de las mismas gracias o circunstancias que suelen comprender, se ofrezca muy de ordinario la expedición de nuevos despachos de los que regularmente se executan"*<sup>29</sup>.

Estos documentos emanados de la Cámara, dispares por las situaciones y personas que contemplan, se engloban bajo un denominador común: la gracia y la merced. Desde un punto de visto teórico-interpretativo gracia y merced en cuanto establecen una relación personal, son el soporte de las relaciones políticas integrando a los "agraciados" en el proyecto político de la Corona<sup>30</sup>.

## 2. Gracia y mayorazgo.

Los mayorazgos que se fundan en estos años siguen el esquema conocido: precede la facultad real para la fundación, que utiliza la misma fórmula ya consagrada con la expresión del poderío real absoluto, aunque sean mayorazgos "adicionales" para los segundones y sobre bienes, hasta entonces, libres. Es el caso del conde de Toreno<sup>31</sup> D. Fernando Queipo de Llano y su mujer, a quienes se concede facultad para fundar un mayorazgo de sus bienes libres, por hallarse con un hijo y seis hijas.

Es el momento de aplicar el mecanismo de la "gracia". El rey concede a un vasallo una gracia sin que el solicitante entregue ninguna contrapartida, aunque luego se enumeran las circunstancias que acompañan la concesión. Es, por tanto, una *gracia*, y se concede *para* algo que todavía no existe pero se espera tendrá realidad: un mejor servicio del rey basado en el lustre y esplendor de la casa. Se concede *por* algo ya comprobado, es decir: se dan simultáneamente un "ante praevisa merita" (antes de los méritos *personales* de los solicitantes), y un "post praevisa merita", en este caso: tomando en cuenta los méritos de los

<sup>28</sup> Para la relación de J. A. ESCUDERO., op. cit., t. III, p. 946 "Relación de la calidad de negocios y dependencias que se manejan por la secretaria de Cámara y Estado de Castilla, y de los despachos que se ejecutan por ella", que remite a AHN. Estado, leg. 31631, núm. 31. Acompaña a este listado otros documentos similares, como el titulado: "Asuntos que pertenecen y pasan por la Secretaría de cámara del Rey", ibid., p. 953; AGP. Sección Administrativa, leg. 468. M. J. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ., op. cit., p. 35, recoge un listado que afirma ser de comienzos del siglo XVIII, y que no es sino el recogido por Escudero, pues ambos coinciden a no ser porque la autora lo ha redactado todo seguido y ha hecho pequeños retoques.

<sup>29</sup> J.A. ESCUDERO., op. cit., p. 953.

<sup>30</sup> Esta lógica está perfectamente expuesta desde dentro del sistema por el cronista real A. NÚÑEZ DE CASTRO., *Libro histórico político solo Madrid es corte y el cortesano en Madrid*. 3<sup>a</sup> ed. Madrid 1675. La tesis del autor es que ninguna otra corte es comparable con la grandeza de Madrid como sede de la Corte. Los cortesanos deben adoptar unas pautas de conducta acordes con su privilegiada situación al servicio del rey.

<sup>31</sup> AHN. Consejos, libro. 7604, 18 mayo 1699.

ascendientes familiares entre los que sobresale D. Fernando Queipo de Llano y Valdés, presidente del Consejo de Castilla y arzobispo de Granada (entre 1633-1639)<sup>32</sup>. Es una gracia "ex opere operato" eficiente por sí misma, que radica en el acto mismo de la concesión por parte del rey, aunque el agraciado debe perfeccionar el acto, gestionando dignamente el mayorazgo: "ex opere operantis". En fin, la concesión de un mayorazgo es un "sacramento" que significa y realiza lo que propone: hace intangibles, cuasi sagrados, determinados bienes materiales por la fuerza superior del rey. Si el mayorazgo es el triunfo de la nobleza bajomedieval<sup>33</sup>, es también la consagración de la doctrina de la Gracia, del Cuerpo Místico, de la Comunión de los Santos, a su vez un corolario de la del Cuerpo Místico, según la cual las buenas obras y los méritos de los santos se aplican a los fieles (los servicios de los antepasados, a sus sucesores). Covarrubias no hubiese ido tan lejos<sup>34</sup>.

Que la concesión del mayorazgo sea una "gracia "se hace más visible "a contrario", cuando se niega (caso muy raro), aun cuando la negativa se disfraza de mero accidente administrativo, como sería la pérdida del expediente, que es la historia de Dña. María de Ucedo, la esposa del valido Valenzuela. En efecto, Dña. María había solicitado la fundación de un mayorazgo en 1675, pero el despacho se perdió sin haber sido sellado y por más que se buscó en la Cámara de Castilla no apareció. En años sucesivos Dña. María insistió y pidió se le diese otro despacho de la minuta que se había formado en la secretaría de la Cámara y Estado de Castilla para la ejecución del mayorazgo, y tampoco pudo encontrarse el expediente. Dña. María insistió por tercera vez, ya con éxito, de manera que en 1698, diecinueve años después de la muerte de D. Juan de Austria, desaparecida también Dña Mariana de Austria y cuatro años después de la muerte de Valenzuela, se concede la gracia y puede fundar el mayorazgo<sup>35</sup>.

### 3. Gracia y crédito

La gracia real fluye en muchas direcciones, no solo en dirección a los individuos, sino hacia las corporaciones que articulan la "república". Los ayuntamientos son sin duda la primera corporación. Desde los años finales del siglo XVI se acentúa el endeudamiento de villas y ciudades obligados a constituir censos para financiar los costos de la política dinástica de los Austrias<sup>36</sup>. Las sucesivas bajadas de los tipos de interés a lo largo del siglo

<sup>32</sup> Cfr. nota 14. J. H. ELLIOT., *El conde-duque de Olivares*, Barcelona, 1990. p. 489.

<sup>33</sup> Sobre esto B. CLAVERO., *Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla (1369-1836)*, Madrid, 1974. En sus comienzos no se necesitaba licencia real para crear mayorazgos.

<sup>34</sup> Véase nota 8.

<sup>35</sup> AHN. Consejos, libro 7600, 22 de septiembre de 1698. Sobre esto vid. J. A. ESCUDERO., "El destierro de un primer ministro: notas sobre la expulsión de Valenzuela a Filipinas", *El consejo de Cámara de Castilla y la Reforma de la Administración y Estado en la España Moderna*, Junta de Castilla y León, 1999. pp. 621 y ss. En la nota 28 de la p. 627 se recoge la noticia de que mientras Valenzuela era llevado a Consuegra, camino del Escorial, su mujer e hijos eran confinados en Sta. Úrsula de Toledo "tan miserablemente que no la han dejado [a Dña. María] llevar más que su cuerpo gentil". Antonio Álvarez-Ossorio analiza magistralmente este episodio en el marco de las relaciones entre la aristocracia y el rey Carlos II, considerado por aquella como "prisionero" y falta de libertad a la hora de permitir y respaldar el ascenso de Valenzuela, por lo que anular todas las concesiones que se le habían hecho fue un acto de justicia. A. ÁLVAREZ-OSSORIO., op. cit., en especial pp. 416 a 433. En el trabajo expone también el concepto que de la gracia y la merced tenían los aristócratas, como límite de la falta de justicia distributiva del Príncipe.

<sup>36</sup> AHN. Consejos, libro. 7590, 22 de febrero de 1697. La villa de Cubillas de Cerrato refiere que en 1580 tuvieron que aportar para la guerra de Portugal 2 soldados, cinco pares de mulas con sus carretas y sus mozos. Lo financiaron tomando un censo de 300 ducados de plata a catorce mil el millar (7,14%), pero en

XVII juega a favor de los ayuntamientos mediante la oportuna "facultad real" para cada caso. Facultad real que se concede en condiciones muy precisas para salvaguardar la hacienda municipal, pero resaltando siempre el carácter de "gracia" por parte del príncipe que actúa como padre respecto a sus hijos menores<sup>37</sup>.

Pero los concejos experimentan la gracia real con un nuevo matiz, la condonación de parte de la deuda con la Real Hacienda, los "débitos reales". En la documentación del Registro General del Sello correspondiente a estos años (1690-1700) aparece continuamente la renegociación de la deuda municipal entre el superintendente general de rentas y las justicias locales. El superintendente suele condonar un tercio de la deuda -en alguna ocasión hasta el 50%- a condición de pagar los dos tercios restantes en plazos fijos. Condiciones duras, pero no imposibles teniendo en cuenta que los créditos solicitados por los concejos para este fin se obtienen ya a un 3,3% según se ha dicho. Incluso estos acuerdos vuelven a ser renegociados al cabo de uno o dos años<sup>38</sup>.

Hay una evolución en esto. Los tipos de interés descienden situándose por debajo del 5% entre el 4,5 y el 3,3% prenunciando en la práctica la pragmática de Felipe V que los sitúa en el 3%<sup>39</sup>, a pesar de las protestas de la iglesia. La extensión de esta gracia a amplios sectores de la población y a los ayuntamientos hace que, sin ignorar los beneficios que supone para una nobleza cargada de censos, maticemos la interpretación de la medida por Clavero y Yun Casalilla. No es una política "social" en beneficio exclusivo de los mayorazgos, es una "gracia" del rey a las comunidades rurales endeudadas, un "alivio" de los vasallos en ocasiones en forma directa y, generalmente, de forma indirecta al perdonar deudas a los ayuntamientos y permitirles renegociar el resto a la baja y con otras condiciones más favorables, como unificar los censos, las pagas, la entrega, los costos, etc. Así procede la villa de Villamayor de Campos. Tiene contra sus propios tres censos por un principal de 110.000 reales, a favor del colegio de los Jesuitas de Villagarcía de Campos, al 3,3%, pagaderos en Villagarcía. Alegando problemas de transporte, inseguridad y otros, renegociaban las condiciones con el convento de Benedictinos de S. Zoilo, de Carrión de los Condes. Estos les ofrecen subrogar los tres censos en uno al 3% y el pago en la parroquia de S. Esteban en el mismo pueblo de Villamayor de Campos.<sup>40</sup>

---

1605 tuvieron que tomar otro censo de 3.000 ducados a dieciséis mil el millar (6,8%). Probablemente las cifras de 1605 están mal dadas, pero ello no afecta al fondo de la cuestión). En 1697 se les ofrecen 15.000 reales al 3,3% (treinta mil el millar), para redimir el principal de 14.200 reales. El tipo de interés ha bajado 3,8 puntos.

<sup>37</sup> Así entiende Castillo de Bovadilla el control real de la hacienda y finanzas municipales.

<sup>38</sup> AHN. Consejos, libro 7572, correspondiente a enero-febrero de 1694, y libro 7612, correspondiente a noviembre-diciembre de 1700. Es el caso, entre otros muchos, de la villa de Torres en Jaén cuya deuda con la real hacienda ascendía a 73.698 reales y 17 mrs entre 1674 y 1691. En agosto de 1696 se llega a un acuerdo con el superintendente general de rentas del reino de Jaén por el que se condonan 36.849 reales y algunos mrs., exactamente la mitad y para el resto se conceden 7 años pagando los vecinos por reparto. Ibid., libro 7593, 23 de julio de 1697.

<sup>39</sup> AHN. Consejos, libro 1475. Pragmática de 12 de febrero de 1705: "siendo repetidas las instancias de diferentes ciudades, villas y lugares de estos nuestros Reynos sobre la baxa y minoración de los réditos de los censos, nos han obligado a procurarles el alivio posible ... en tiempo que las comunes necesidades precisan a pedir nuevos subsidios ... ordenamos y mandamos que no se pueda constituir censo al quitar menos de teinta y tres mil y un tercio el millar, y los constituidos antes queden desde luego reducidos a él ... que se ha de entender y practicar a 3%". Pero se pueden encontrar tipos de interés aún más bajos, por ejemplo el marqués de Tenebrón consigue un préstamo a "cuarenta mil el millar", o sea: al 2,5%. Ibid., libro. 7600, 1 de septiembre de 1698.

<sup>40</sup> AHN. Consejos, libro 7586, 26 de junio de 1696. Se pueden espigar muchos más casos, por ejemplo la villa de Martín Muñoz de las Posadas había tomado a censo 242.000 reales al 5% para un pleito con el



#### 4. Venalidad y gracia.

Otro importante aspecto relacionado con la gracia es lo referente a la concesión de títulos de regidores y oficiales del concejo, tema bien representado en nuestra documentación. Obviamente no se toman en consideración los alcaldes ordinarios porque son electivos. El tema tiene dos vertientes bien diferenciadas: la compra de cargos y la merced real. Aparentemente son dos lógicas enfrentadas. No puede haber merced donde hay compra, es decir un contrato que vincula a dos partes por igual. Estamos ante el cumplimiento de una obligación por parte del rey, vendedor, frente al particular, comprador. No importa que no sea la persona particular del rey quien pone a la venta los cargos, ni que tampoco sea su bolsillo particular quien recibe el importe de la transacción, pues todo ello se realiza a través de instituciones, en último término instrumentos de la corona<sup>41</sup>.

A partir de aquí vamos a exponer una serie de datos sobre compra-venta de cargos<sup>42</sup>, pero adelantando que en la misma operación de compra-venta está inherente la noción de gracia y merced real, por lo que compra-gracia no son excluyentes. La compra de regidurías, su perpetuación, las particularidades y condiciones de muchas de estas compras son, sin duda, operaciones comerciales beneficiosas para la Real Hacienda y para el particular. Esto se hace más visible cuando se trata de "acrecentar" oficios para venderlos. Incluso cuando para la Hacienda Real llega el momento de la sensatez y la racionalidad a impulsos de las Cortes, o de algún primer ministro clarividente que pretende la anulación de tales ventas, la Corona reconoce siempre el derecho del comprador a recuperar el dinero invertido, de tal manera que solo entonces se "consumirá" el oficio en cuestión. Ambas partes se sienten igualmente obligadas por la compra-venta.

Ahora bien ¿qué vende el rey y qué compra el particular?. A primera vista hay una respuesta diáfana. El particular compra no sólo el ejercicio de un oficio sino el oficio, al que debe atender con fidelidad gestionando con justicia la hacienda municipal, en el caso de la compra de regidurías, pero no adquiere rentas, ni ingresos, ni ningún otro emolumento a no ser los escasos maravedíes asignados en algunos ayuntamientos, no todos, a los regidores. Lo que el comprador adquiere, en realidad, son otro tipo de bienes, como el reconocimiento por parte de sus vecinos, el prestigio inherente al poder, el participar en la dirección de la comunidad, administrar honradamente sus bienes, representarla corporativamente en las manifestaciones sociales, religiosas y políticas. Se compra, por tanto, poder, prestigio, posibilidades, opciones. Si se es pechero se adquieren, ante todo, los instrumentos básicos para desmontar o, al menos, defenderse de la maquinaria impositiva; se compra el paso de pechero-dominado a la condición de poderoso local y todo ello porque se ha convertido en un "hombre del rey"; esto es lo que, en definitiva, contiene el título de "regidor" o cualquier otro cargo. El título es el "empaquetado de lujo", el verdadero regalo es lo que el título implica<sup>43</sup>.

---

Consejo de Hacienda sobre alcabalas, cientos de alcabalas y tercias. El consejo concede licencia para aceptar esa cantidad al 3,3%, que supone a la villa un ahorro de 4114 reales/año. Ibid., libro 7588, 6 de octubre de 1696.

<sup>41</sup> Sobre el "bolsillo del rey", y sus gastos secretos, ver J. E. GELABERT., *La bolsa del rey. Reino y fisco en Castilla (1598-1648)*, Barcelona, 1997. Se encuentra muy avanzado el estudio del tema por parte de David Séiz Rodrigo, que ya dedicó su memoria de Licenciatura al particular.

<sup>42</sup> F. TOMÁS Y VALIENTE., "Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVI y XVIII)", *Historia. Instituciones. Documentos*, núm. 2 (1975) pp. 3 y ss.

<sup>43</sup> Cabrera de Córdoba aclara que en todos los oficios vendidos el rey conserva siempre el dominio directo: "se espera que saldrá un oficio de perpetuar los oficios renunciabiles dentro de veinte días, para que cada uno pueda disponer del que tuviere en vida o en muerte, pagando luego la décima parte que les costó, y la

Se compra con criterios económicos, se hace una inversión a corto o a medio plazo en que la relación costo/beneficio sea provechosa. Por ello no siempre hay una avalancha de compradores como lo ejemplifica lo que sucede en 1632 en el distrito de la Inquisición de Toledo. Cuando el Consejo de la Suprema pone en venta familiaturas y varas de alguacil no se registra una riada de compradores ni una subida de precios. Todo lo contrario. Solamente en Manzanares hay una cierta puja, pero con condiciones exorbitantes, no aceptables, mientras que en Valdemoro y en Ocaña se informa de que nadie quiere varas de alguacil de la Inquisición porque no son estimadas: en Pastrana alcanzan precios bajísimos, mientras que un fraile resalta que “en esta villa y en Cabeza de Arados ... -nadie quiere las varas- y los que las tienen las dejarían de muy buena gana”<sup>44</sup>.

El mercado, pues, actúa con sus leyes. Un oficio puede subir o bajar en función de la prisa de los compradores, o de la estima del oficio. Esta es la historia de un oficio de alguacil y portero de la Junta de Aposento entre 1640 y 1699. En 1 de octubre de 1640 se le adjudica en propiedad a Juan Bartolomé Gutiérrez por “servir” con 16.500 reales. En 1670 “sirve” con 12.900 reales más con lo que se le acumulan diversos privilegios; en total ha hecho una inversión de 29.400 reales. Lo vende pronto a Fernando de Lorenzana en 40.000 reales; en 1699 se subasta y se remata en 40.200 reales<sup>45</sup>. El mismo oficio, en las mismas condiciones ha tenido dos fases bien diferenciadas, en la primera ha experimentado una revalorización de un 25%, y en la segunda se mantiene a la par.

El mercado puede funcionar en sentido inverso, mostrando una sensible depreciación de los oficios. Un tal Pedro Ruiz, de Moclín, había “servido” con 7.810 reales por un oficio de alguacil mayor, perpetuo por juro de heredad, que dejó a su hijo Juan de Prado, quien a los dos años, en 1699, lo vendió en 4.200 reales, con una pérdida de más del 45%. Casi por los mismos días D. Antonio Martínez de Pineda adquiere en pública subasta un regimiento perpetuo en Coin después de pujar hasta 600 ducados. El regimiento era propiedad de D. José Niño de Guevara desde 1675, pero estaba cargado con un censo de 800 ducados de principal a favor del tribunal de la tesorería de la Inquisición de Granada y estaba debiendo grandes cantidades, por lo que la Inquisición subastó el oficio<sup>46</sup>. En conclusión: un oficio del rey ha entrado en el mercado, como cualquier otra mercancía, y el rey parece perderle la pista, como si ya no fuera suyo, sino del mercado. En realidad no es así porque la Cámara de Castilla conoce perfectamente el historial de cada oficio vendido y mantiene un estricto control al respecto, aun a riesgo de aceptar que cualquier comprador tiene capacidad suficiente para desempeñarlo.

La documentación manejada tiene la ventaja de ser una genealogía sucinta del oficio, en la que se recogen los tres últimos tenentes del oficio. Veámoslo en Oviedo. Antes de 1668 era regidor perpetuo D. Juan Rato Casso (primer tenente); en 23 de mayo de 1668 se extiende título de tal regidor perpetuo a favor de D. Juan Casso (segundo tenente), quien treinta años después renuncia en D. Damián de la Buelga (tercer tenente) a favor del cual se extiende el correspondiente título en 22 de mayo de 1699<sup>47</sup>. Así que se puede hablar de unas

---

veintena cuando lo vendiere, por el directo dominio con que el Rey se queda en todos los oficios ...” L. CABRERA DE CÓRDOBA., *Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 a 1614*, Pref. de R. GARCÍA CÁRCCEL., 1977, p. 290, corresponde a 30 de septiembre de 1606.

<sup>44</sup> AHN. Inq. libro 3105, cartas de 1 de septiembre de 1631; 15 de diciembre de 1631; 26 de agosto de 1631; 24 de febrero de 1633 y libro 3107, 12 de mayo de 1635.

<sup>45</sup> AHN. Consejos, libro 7604, 23 de junio de 1699. El remate en 40.200 reales resulta engañoso, hay que tener en cuenta la compleja devaluación de 1680-1686, que hace bajar sensiblemente los precios nominales.

<sup>46</sup> AHN. Consejos, libro 7602, 22 de febrero de 1699 y libro 7603, 23 de marzo de 1699.

<sup>47</sup> AHN. Consejos, libro 7604, 25 de mayo de 1699.

1500 personas administrativamente en relación con la Cámara y, a través de ella, con el rey. Interesa subrayar, por tanto, que la gracia no es algo puntual, referido a una persona, sino un flujo continuo a través de tres generaciones<sup>48</sup>.

##### 5. Oficio del rey/propiedad privada.

Quien ha comprado un oficio puede hablar así: “he comprado al rey un oficio por el que he pagado el precio pactado, por tanto soy regidor”. El rey, en cambio dirá, “sois *mi* regidor, y ordeno a todos que os consideren y traten como a tal *mi* regidor (póngase aquí el oficio de que se trate), y espero que uséis el oficio según unas normas precisas, como vuestros iguales, para lo cual os *concedo* todas las distinciones y prerrogativas del oficio”. Así planteado los dos puntos de vista son correctos, pero este no es el plano adecuado para considerar la situación pues la Cámara de Castilla legitima las más diversas situaciones como merced y gracia, obviando -no negando- los aspectos contractuales.

La concesión del título de “Escribano de la Comisión, superintendencia, beneficio y cobranza de los maravedís y efectos de penas de Cámara y gastos de Justicia del Consejo” a Juan de Herrera Castañedo lo ilustra. El interesado es un protegido del licenciado D. Gil de Castejón, caballero de Alcántara “del Consejo y Cámara, y superintendencia de dichos efectos”. Juan de Herrera lleva trabajando 24 años en el Consejo como oficial mayor de la escribanía de la cámara, ejercida por el secretario Miguel Fernández Noriega, simultaneando este oficio con el que ahora se le ofrece, por nombramiento “vitalicio” de D. Gil de Castejón. Una real cédula de 17 de julio de 1686 le concede el oficio por una vida más, merced que se completa cuando en 24 de abril de 1690 se le concede el oficio perpetuo, por juro de heredad habiendo “servido” con 50 ducados. Aquí arrancan los problemas para Herrera Castañedo, y la solución para nosotros. Alguien impugna la concesión de la perpetuidad alegando que ha existido *pago de dinero*, lo que excluye la concesión como *merced*, en remuneración de los largos años de servicio, por lo que se le puede despojar del oficio y someterlo al mecanismo de puja y tanteo. Inicialmente el Consejo y la Cámara aceptan este punto de vista dejando claro que las dos primeras situaciones son “graciosas” pero no la última, la perpetuación, por lo que “ha lugar” para la puja y tanteo. Herrera Castañeda acude al rey solicitando que la perpetuación se considere como gracia y remuneración de servicios argumentando que 50 ducados es una cantidad meramente simbólica, mínima, como algunas limosnas menores y ocasionales que hace el Consejo. Propone otra alternativa: que la gracia y merced se concedan ahora “ex novo”. El Consejo accede a esta petición y confirma la gracia de la perpetuación hecha en 1690, eludiendo cualquier referencia al “servicio” de los 50 ducados.<sup>49</sup>

Los oficios no se merecen, se conceden como remuneración y estímulo, a fin de vincular al beneficiario con la persona del soberano, de tal manera que la cadena sucesoria en el oficio puede romperse, pero nunca la vinculación del oficio con el soberano, porque el oficio sigue siendo del rey. Así en 1698 se concede a Juan Marcos Sendín, marqués

<sup>48</sup> Para Salustiano de Dios “el mundo de los oficios de los concejos, [es] una de las áreas que arroja mayor documentación del despacho de la Cámara”, op. cit., p. 325. Thompson interpreta el notable crecimiento de regidurías por venta desde la perspectiva de la Corona, como la vía para integrar las oligarquías urbanas en el Reino. Entre 1543 –primera regencia de Felipe II– y 1665 –muerte de Felipe IV– se crearon entre 6.000 y 8.000 oficios con voz y voto en los ayuntamientos. I.A.A. THOMPSON, “Patronato Real e integración política de las ciudades castellanas bajo los Austrias”, en J. I. FORTEA (ed.), *Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII)*, Santander, 1997, pp. 475 y ss.

<sup>49</sup> Ibid., libro 7601, 19 de noviembre de 1698.

consorte de Yebra, un oficio de regidor perpetuo de Madrid, que había sido de Gabriel Fernández Madrigal, *"teniendo consideración vuestra suficiencia y avilidad, y a los servicios que me havéis hecho y que espero los continuaréis"*, y subrayando el carácter de merced a todos los beneficiarios se les han de guardar *"todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, exempziones, preeminencias, prerrogativas y inmunidades y todas las otras cosas que por razón de dicho oficio"* les son propias<sup>50</sup>.

El oficio es del rey, tiene vida propia como tal oficio del rey aunque haya estado tiempo sin servidor alguno. Así lo demuestra la concesión de una regiduría, con calidad de renunciabile, en Ponga a D. Diego Alonso del Rivero y Posada, caballero de Santiago, después de haber "servido" con 300 ducados. La regiduría, con la misma calidad de renunciabile, había pertenecido en 1598, cien años antes, a Julián Alonso quien no había hecho efectiva la renuncia, así que al cabo de cien años la regiduría recae en "mi caballerizo" -dice el rey- D. Diego Alonso<sup>51</sup>.

El soberano puede crear, modelar, remodelar, fragmentar oficios aunque ello provoque conflictos ya conocidos entre particulares y con las Cortes, con las cuales se pactan las condiciones de millones que vinculan al Rey y al Reino, aunque el rey buscará mil subterfugios para flanquearlas alegando las inexcusables necesidades de defensa de la Monarquía. En algunos ocasiones el Reino cederá, pero sólo hasta cierto punto. Así en las Cortes de 1659 se le concede al rey vender cargos hasta un millón y medio de ducados<sup>52</sup>.

A estas limitaciones contractuales se deben sumar otras cortapisas que limitan al rey en su capacidad de designar "oficiales" y que dimanen de situaciones de privilegio heredadas por ciudades o territorios, siendo la ciudad o el territorio quien elige y designa la persona que desempeñará el cargo, y el rey quien nombra. Tal es el caso de la provincia de Guipúzcoa y Álava y señorío de Vizcaya, o el de ciudades como Orán -"la Corte Chica"<sup>53</sup>- las islas de "Canaria" y Tenerife. En estos casos las competencias están delimitadas y compartidas, con alguna salvedad. Los territorios en cuestión no tenían capacidad de "acrecentar" oficios, mientras que por la vía de hechos consumados, sí lo hacía el rey, quedando el nuevo electo/nombrado bajo el ámbito del rey: *"es mi voluntad seais mi sscrivano..."*.

Estos actos provocan automáticamente la respuesta del territorio o ciudad en forma de reclamación o pleito. La larga duración de tales pleitos juega siempre a favor de la voluntad real. Tal es el caso de D. Cristóbal Lodeña Muñoz y Martínez, quien recibe un título de regidor perpetuo en la villa del Toboso, en uno de los regimientos acrecentados, por haber servido con 7.000 reales, la tercera parte en plata. La villa recurre el nombramiento ante el Consejo de Castilla porque tiene privilegio real de que no se acrecienten oficios. Ahora bien, el proceso ha seguido adelante y a lo largo de veinte años el oficio pasa de mano en mano de acuerdo con sucesivos testamentos de los "propietarios" hasta que en 1697 recae, por compra, en D. Diego Arias Ortiz, quien paga la media anata por la merced. En el título que la Cámara expide a su favor se recoge sumariamente las claves del pleito reconociendo el privilegio del Toboso, pero también el del primer y sucesivos poseedores, todos los cuales han pagado la media anata de mercedes y han recibido el título correspondiente<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> AHN. Consejos, libro 7600, 13 de octubre de 1698.

<sup>51</sup> Ibid., libro 7603, 3 de marzo de 1699.

<sup>52</sup> Recuerdo que este apartado está contenido expresamente en numerosas concesiones recogidas en la muestra documental manejada, lo que hace innecesaria cualquier referencia bibliográfica. Ver sobre esto J. L. CASTELLANO, *Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789)*, Madrid, 1990.

<sup>53</sup> Cfr. El trabajo de B. ALONSO ACERO y M.A BUNES IBARRA en el presente trabajo.

<sup>54</sup> AHN. Consejo, libro 7601, 3 de diciembre, 1698; es la fecha del pago de la media anata, aunque el título tiene fecha de 13 de mayo de 1698. En este caso intervienen Cámara -gestor de la gracia- y Consejo: garante

En este caso, y en otros muchos, la merced y la gracia coexisten con los derechos opuestos de otros sujetos lo que, en el fondo, equivale a otorgar la primacía a la voluntad del rey. Lo mismo cabe decir cuando coinciden regidores perpetuos propietarios de oficios acrecentados con regidores “añales” o “cadañeros”. Aquí, sin embargo, las cosas adquieren una complicación adicional. La gracia real, condicionada por la compra, obliga a la coexistencia de ambos grupos de regidores, al menos hasta que los compradores hayan sido resarcidos de su compra. En tales casos, el rey se ve cogido entre dos obligaciones cuya funcionalidad dimana de dos principios. Por un lado, las “leyes del Reino” amparan a los regidores añales, por otro lado el rey mantiene su “derecho” a conceder gracias y mercedes manteniendo en su puesto a los regidores perpetuos. En estos casos la Cámara deja las cosas tal como están, no puede optar por unos frente a otros.

#### 6. Gracia y patronato real.

Gracia y arbitrariedad no son lo mismo. En el fondo, la gracia es justicia “*distributiva, remuneratoria o distintiva, discriminatoria y desigualitaria, aquella que conviene al príncipe para galardonar los trabajos y servicios prestados a favor de los reyes y de la causa pública de los reinos...*”<sup>55</sup> y la justicia es una virtud cardinal junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza<sup>56</sup>, condiciones del buen gobierno. La práctica de la justicia hace al rey ganar méritos ante los ojos de Dios. Así se explica la fórmula ritual presente en todos los títulos expedidos en el ámbito de aplicación del Patronato Eclesiástico. Cada título recoge esta secuencia expositiva. Primero: el saludo, después el rey afirma su derecho (anterior a toda concesión apostólica) a hacer nombramientos con esta fórmula: “*así por derecho como por Bulla Apostólica, a mí pertenece el Patronazgo y presentación de todas las dignidades...*”, a continuación expone el caso concreto enumerando estos pasos: existencia de una vacante, publicación, oposición, propuesta del tribunal y nombramiento real. Y es aquí donde el rey deja en claro que la gracia es justicia y no arbitrariedad asegurando que se ha nombrado al más idóneo por sus cualidades, con la justificación definitiva: “*con quien mi conciencia sería descargada*”. Y esto incluso en los casos más discutidos, o discutibles, cuando el nombramiento obedece claramente al triunfo o imposición de una facción sobre otra. Así en Baza, donde la oposición a una canonjía lectoral de Escritura arroja estos resultados: 6 votos de 8 a favor de D. Sebastián Pacheco Izquierdo, presbítero y colegial del Real de Granada mientras que otro candidato obtiene 8 votos de 8. El nombramiento recae en D. Sebastián Pacheco Izquierdo (el menos votado) “*con quien mi conciencia sería descargada*”, porque Baza depende del Real de Granada<sup>57</sup>.

---

de la justicia. Para Salustiano de Dios “si los particulares, si las Cortes, si los prácticos del derecho tenían clara la distinción entre gracia y justicia en los términos expuestos, no sucedería otra cosa en el ámbito de la propia Cámara, dejando de lado abusos e intervenciones en lesión de derechos de terceros”, op. cit., p. 281. ¿Quiere decir que casos como este son abusos de la Cámara?. No. Ha habido de por medio un proceso ante el Consejo del que se deriva una sentencia, y la Cámara reasume la sentencia como nueva gracia. Es lo que el autor analiza más adelante, p. 362 como “una de las expresiones más sonadas del poder absoluto del príncipe...: la confirmación de actos y negocios jurídicos, de oficio o a instancia de parte, con la finalidad de roborar, sanar, y suplir cualquier vicio o defecto que existiera en ellos”. Esta explicación es válida asimismo para la nota 45.

<sup>55</sup> S. de DIOS., op. cit., p. 278.

<sup>56</sup> Ibid., p. 279.

<sup>57</sup> AHN. Consejos, libro 7604, 26 de junio de 1699.

## 7. Gracia y mérito.

Pero la Justicia ha de estar presente en todos los nombramientos de la Administración, y no solo en el Patronato Eclesiástico. A ello responden los títulos que se expiden con inclusión explícita e insistente de palabras como *capacidad, habilidad, servicios prestados, servicios futuros* todo ello referido al interesado. Tal identificación de méritos personales excluye la arbitrariedad y personaliza el mérito en el individuo y no en el estamento al que pertenece<sup>58</sup>, lo que constituye un estímulo para continuar en el servicio real. (En este momento nos ceñimos a los nombramientos en la administración y no a la concesión de mayorazgos, donde predomina la dinámica familiar y del linaje). Un repaso por las hojas de servicio de militares y funcionarios aclara estas situaciones. Si atendemos exclusivamente a esta documentación habría que deducir que la España de Carlos II disponía de una administración plagada de personas eficientes (tal vez no muy creativas) acreedoras a todas las mercedes reales.

La fórmula recogida más arriba: “*teniendo en consideración vuestra suficiencia y avilidad, y a los servicios que me havéis hecho y que espero los continuaréis*”<sup>59</sup>, es general, en todos los niveles de la Administración, y cuanto más se asciende en la burocracia, mayor acumulación de méritos se hacen patentes por parte de los solicitantes de un oficio. A las peticiones de los particulares, la Cámara responde con fórmulas laudatorias para la labor realizada y que, al mismo tiempo, comprometen el rendimiento futuro.

El título de Contador de resultas en la Contaduría Mayor de Cuentas a favor de D. Francisco de las Veneras Herrera, enumera sus 22 años de servicio y “méritos en las plazas de contador en *mi* Contaduría Mayor de Cuentas, como oficial de la Secretaría de Presidencia de *mi* Real Hacienda, y de una de las Contadurías de *mis* libros de Relaciones y ... extraordinario ... y siempre con todo celo, inteligencia, satisfacción y desinterés ...”<sup>60</sup>.

Como no se trata de enumerar todos los casos recogidos en la muestra, baste con una cita más, esta vez referida a D. Francisco de Alcozer y Salzedo “oficial mayor de *mi* escribanía mayor de rentas” cuyo curriculum comprende 35 años de servicio partiendo de “entretenido”, con ascenso a oficial mayor “sirviendo también las ausencias y enfermedades del propietario, uno y otro con desinterés y aprobación”, por lo que se le concede el título “ad honorem” de Contador de resultas de la Contaduría Mayor de Cuentas<sup>61</sup>.

## 8. Secretario real

La culminación de la gracia en la carrera administrativa, pero no solo en ella, se identifica con el título de secretario real. No hay un estudio sobre el particular, debido a que no están en la “planta” de las instituciones ni tienen asignadas tareas, sino únicamente la expectativa de poder acceder a ejercerlas -y a cobrar 100.000 maravedíes- cuando se produzcan vacantes, por ello también se concede el título a personas ajenas a la burocracia.

<sup>58</sup> Interesantes sugerencias sobre mérito y servicio, aunque aplicados a la Francia de Luis XIV, en J. M. SMITH., *The culture of merit. Nobility, Royal Service and the making of Absolute Monarchy in France, 1600-1789*, 4ª ed. Ann Arbor, 1999. Defiende que la nobleza acepta la idea de “mérito”, lo cual hace que no sea una idea de la burguesía, aunque los nobles tenían una particular idea del mérito, vinculada a su condición.

<sup>59</sup> Cfr., supra nota 29.

<sup>60</sup> AHN. Consejos, libro 7600, 21 de agosto de 1698.

<sup>61</sup> Ibid., libro 7601, 17 de diciembre de 1698.

Es un honor que sitúa al interesado en el ámbito real, aunque no sea un cortesano<sup>62</sup>.

En el año que abarca este trabajo se contabilizan 32 (treinta y dos) concesiones. La motivación es similar en todos los casos, se trata de premiar una trayectoria de servicios:

*“y atendiendo a que es justo ir premiando algunos que me sirven en materia de papeles con este honor sin cargar mi Real Hazienda ... -aquí el nombramiento- os guarden y agan guardar todas las onrras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, exempziones, preheminencias, prerrogativas e inmunidades ...”*

La figura de secretario real “ad honorem” no es nueva y está perfectamente regulada. Cada nombramiento de esta clase recoge el “status quaestionis” remontándose a 1622, cuando Felipe IV ordena que los secretarios honoríficos existentes se vayan reduciendo gradualmente a 6, a medida que se produzcan vacantes, percibiendo los 100.000 maravedíes de salario establecidos. En 1669 la Reina gobernadora eleva el número de 6 a 12, con la misma situación salarial. Así están las cosas en los años finales del siglo.

Los agraciados proceden de la burocracia o de las corporaciones municipales locales sin que sea necesaria una especial vinculación con el rey en origen, pero esta se produce como consecuencia del nombramiento. Hay una excepción, que debemos recordar. De los 32 nombrados, 7 (siete) están vinculados a Toledo, 6 como jurados de la ciudad y el séptimo es el secretario del secreto de la Inquisición de la ciudad imperial. De uno de los jurados se dice expresamente: “*me avéis servido en las ocasiones*” en que el rey ha estado en Toledo, que ha sido recientemente; por otra parte la Reina Madre ha residido en Toledo y allí ha muerto, todo lo que cual sugiere una especial relación con el entorno real por parte de estos toledanos. Lo cual se confirma si miramos el resto de los agraciados procedentes de concejos: un jurado de Écija, un regidor de Valladolid, por cierto, consultado en 10 de febrero de 1691 y nombrado secretario real en diciembre de 1698, y un escribano del ayuntamiento de Soria<sup>63</sup>.

## 9. Gracia y millones.

Las gracias y mercedes son, pues, la contrapartida de determinados servicios muy concretos e individualizados. Pero hay una área especialmente sensible donde la gracia real se muestra como impulsora de determinadas conductas para premiarlas. Estos años estudiados, 1698-1699 ven extenderse las mercedes reales a personas cuyos servicios-méritos consisten en la defensa eficiente de las peticiones de la Corona a las ciudades para que concedan la prolongación del servicio de millones. Trece anotaciones en la muestra tienen que ver con esto. Hay dos nombramientos de secretario de Su Majestad “ad honorem” (sin salario); tres plazas honorarias en el Consejo de Hacienda; tres plazas en el tribunal de la Contaduría mayor de Cuentas y, finalmente, otras cuatro plazas en el Consejo de Hacienda, sin ejercicio, a la expectativa de vacante<sup>64</sup>.

D. Baltasar Sánchez, escribano del ayuntamiento de Soria recibe el título honorífico de secretario de Su Majestad, “*a consulta de la Juntta de Asistentes de Cortes ... por haver*

<sup>62</sup> J. A. ESCUDERO., op. cit., dedica un par de párrafos de pasada al tema de los “secretarios honorarios”: “Se pretende el cargo de secretario del Rey por ser un primer paso en el itinerario ascendente de las secretarías, o bien por el sueldo o la carga honorífica que consigo lleva”. T. II, p. 373, nota 284.

<sup>63</sup> AHN. Consejos, libro 7601, 1 de diciembre, 1698.

<sup>64</sup> J. L. CASTELLANO., *Las Cortes de Castilla a comienzos de la Época Moderna (1476-1515)*, Madrid, 1988. pp 88 y ss., revisa las relaciones entre Comisión de Millones, Diputación del Reino y “Gobierno” para dar razón de estas promociones. Es sugerente, aunque identifique “gobierno” con Corte.

concurrido con vuestro boto en el de la última prorrogación que la dha. ciudad me concedió de los servicios de millones ...". La misma motivación en el caso de Sebastián de Olmedo, escribano de la ciudad de Palencia: "*me havéis servido en la última prorrogación de los servicios de millones*" además de tomar en cuenta sus méritos y calidades<sup>65</sup>. Al Consejo de Hacienda han sido promovidos "ad honorem" D. Domingo de Cúñiga Tovar y Guzmán, regidor de Guadalajara y D. Diego Muñoz de Dueñas, veinticuatro de Sevilla, ambos por el "servicio" que hicieron dando su voto para la prorrogación de los millones. Al tribunal de la contaduría mayor de Cuentas han sido promovidos "ad honorem" D. Joseph Noriega, caballero de Santiago y regidor de Madrid, D. Joseph Muñoz de Castilblanqui, caballero de Alcántara, gentilhombre de boca y regidor de Cuenca y, finalmente, D. Carlos Valmaseda Vozmediano y Coello, regidor de Valladolid, los tres por haber concurrido con su voto en la última prorrogación del servicio de millones<sup>66</sup>. Finalmente se hace merced de una plaza honoraria en el Consejo de Hacienda a D. Diego de Lerma y a D. García de Giraldo, los últimos comisarios de la comisión de millones, "*por quanto con el nuevo sorteo de comisarios de millones, havéis quedado sin ejercicio*" y es que el Rey ha accedido a la solicitud de las ciudades para que los miembros de la comisión se elijan por sorteo y por un tiempo de 6 años. Estos nuevos miembros del Consejo lo serán "sin ejercicio" hasta que no se produzcan vacantes, que se ocuparán por criterio de antigüedad<sup>67</sup>.

Hay alguna diferencia en estas promociones, pues mientras unos siguen desempeñando sus regidurías, otros han quedado sin oficio en virtud de una decisión política negociada entre el rey y el reino, por lo que se les ofrece una merced adicional: la expectativa de una plaza efectiva en el Consejo, y no meramente los honores, que excluyen taxativamente el ejercicio y el sueldo, pues se conceden "*sin exercicio, gaxes, ni emolumentos*".

Ninguna novedad en el fondo de la cuestión. Es sabido que las Cortes se cerraban con un rosario de mercedes, más aún, antes de comenzar las sesiones se disponía de información suficiente sobre todos los procuradores y sus puntos "débiles" a fin de lograr su voto a las propuestas de la Corona<sup>68</sup>. Aunque las Cortes dejen de convocarse a partir de 1665, no por ello el Reino pierde su relación privilegiada con el Rey. Cuestión distinta es averiguar e identificar los canales de distribución de la gracia real, cuales son los filtros entre el Rey y el Reino, las intermediaciones. Sin duda alguna los informes de los corregidores son vitales. ¿Cómo, si no, explicar las concesiones que acabamos de exponer? ¿Cómo se enteraba la Cámara de los regidores u otras personas que han contribuido decisivamente a la concesión de la prórroga de millones?. Los corregidores, sin duda, han cumplido esta misión informativa.

<sup>65</sup> AHN. Consejos, libro 7604, 4 de mayo de 1699; libro 7601, 25 de noviembre de 1698.

<sup>66</sup> Ibid., libro 7601, 18 de noviembre, 2 de diciembre y 5 de noviembre de 1698; libro 7603, 5 de marzo de 1699 y, finalmente, libro 7604, 12 de junio de 1699.

<sup>67</sup> Ibid., libro 7601, 7 de noviembre de 1698; libro 7602, enero-febrero 1699.

<sup>68</sup> Vid J. L. CARRETERO., op. cit. Sobre todo la tercera parte: Perfil social del Procurador. Los privilegiados. J. L. CASTELLANO., op. cit., recoge la Consulta de la Cámara de 1667, según la cuales las Cortes tenían un costo de más de 500.000 ducados; añade "no se comprenden las mercedes particulares que se acostumbran a cada procurador de mercedes particulares, rentas de por vida, hábitos, gobiernos y otros semejantes", p.74. En mi inédita tesis doctoral (*Pensamiento español del siglo de Oro en torno a la Pobreza*, UCM. 1974) recogí ya un documento de este tipo referido a los posibles procuradores de las Cortes de 1619: "Relación de pretensiones de que se tiene noticia de regidores de ciudades de voto en Cortes". AGS. PR, 90, 58. Para Toledo, por ejemplo, se enumeran 6 regidores: "Juan de Toro: saber lo que pretende (una nota marginal: lojo); Licenciado Ceballos: acordarle para una plaza; Melchor Dávila: hábito. Concesión; Doctor Angulo: pide plaza de asiento. Acordarle para consejo; Don Juan Vaca de Herrera, señor de Daganzo, un corregimiento, acordarle; otro pide Don Pedro Vera, acordarle". Así se repasan todos los demás regidores de diversas ciudades.



A la altura de 1698 quienes disfrutaban de estas mercedes pueden considerarse ya seguros frente a los ramalazos moralizador/recaudatorios de la Corona, frente a la situación de inseguridad creada en 1693. En noviembre de ese año una furia revisionistas de mercedes y gracias sacudió al Consejo de Castilla que ordenó una revisión de todas las mercedes concedidas, en las que se sospechaba la existencia de "lesión enorme y aún enormísima". Domínguez Ortiz concluye que todo quedó prácticamente como hasta entonces por la incapacidad de la Hacienda de devolver las cantidades cobradas a los compradores. Sánchez Belén ha recogido algunos pequeños éxitos en este campo<sup>69</sup>.

Conocemos un caso significativo. Manuel de Peñas, obligado al abasto del carbón de Madrid, en 1682 compró el oficio de escribano de cartas de pago del ayuntamiento de Madrid y recibió, además, el título de secretario real; en 1696 está debiendo a la media anata de mercedes 56.250 maravedíes del nombramiento de secretario real y de la concesión de un hábito de Santiago<sup>70</sup>. Pero Manuel de Peñas tiene las cuentas bien claras y las justifica ante la reclamación del Consejo. El oficio de escribano de cartas de pago costó 900.000 reales de vellón que pagó en metálico y "en efectos", que para el fiscal del Consejo están supervalorados: "*es notorio que la común estimación de ellos es a la mitad, y aún menos*". Los herederos de Manuel de Peñas alegaron que los 900.000 reales rentaron tan solamente un 3%, mientras que de haberlos invertido en otra parte hubiesen obtenido hasta un 8%<sup>71</sup>.

#### 10. Gracia y desgracia.

Dejando de lado este tira y afloja entre partes, es claro que la Corona no pretende anular las mercedes concedidas<sup>72</sup>, ni siquiera recortar la concesión de nuevas mercedes, sino tan solo garantizar la obtención de un "servicio" más elevado, como una mayor adecuación del agraciado a la merced recibida. Si alguien cae en desgracia sufre un fuerte castigo que puede consistir en no recibir las mercedes solicitadas, caso de Dña. María de Ucedo antes referido, o, algo más serio todavía, una penalización que visualiza la pérdida de la gracia real mediante el destierro y la pérdida de los bienes.

Así deben leerse algunos acontecimientos de la época. El año 1697 ve la desgracia del obispo de Ciudad Rodrigo. En uno de los encuentros diarios entre Corona e Iglesia, el obispo de Ciudad Rodrigo, Fr. Francisco Manuel de Zúñiga, excomulga al gobernador y autoridades en junio de 1696 porque el gobernador quiere hacer contribuir en los millones a la carnicería del cabildo eclesiástico, negándose el obispo en nombre de la inmunidad. En octubre el Consejo ordena el secuestro y embargo de los bienes del provisor del obispado, Juan de Sarria, y su destierro a Portugal por no levantar las excomuniones. En diciembre se le intima al obispo, oculto en Madrid, que levante las excomuniones, imponiéndole una multa de 1.000 ducados por su contumacia "*con apercivimiento de las temporalidades que abéis y tenéis en estos reynos y que seréis avido por ajeno y extraño de ellos*". Seguidamente se cursan dos órdenes al Alcalde Mayor de Ciudad Rodrigo, una para que "saque" los 1.000 ducados de multa de cualesquiera bienes del obispado y los remita a la corte, donde serán aplicados a los hospitales de Ceuta, otra para que embargue todas las rentas pertene-

<sup>69</sup> J. A. SÁNCHEZ BELÉN., "La incorporación de rentas reales enajenadas en el Reinado de Carlos II". en, *Señorío y feudalismo en la península Ibérica, ss. XII-XIX*, Zaragoza, 1993.

<sup>70</sup> AHN. Consejos, libro 7586, 16 de mayo de 1696.

<sup>71</sup> J. BRAVO LOZANO., *Montes para Madrid. El abasto de carbón vegetal a la villa y corte en los ss. XVII y XVIII*, Madrid, 1994, p. 229 La reclamación es en bloque, y se refiere al conjunto de las mercedes recibidas por Manuel de Peñas.

<sup>72</sup> Según S. de DIOS., op. cit., la gracia, una vez concedida, se consideraba "justicia", p. 279.

cientes al obispo en razón de tal obispo de Ciudad Rodrigo. Luego se comunica a D. Francisco Colón de Larreátegui y a D. Pedro Queipo de Llano, alcaldes de casa y corte la siguiente orden: “*sabed que a nuestro servicio conviene saquéis destes nuestros Reynos al Reverendo en Xpto. Padre Dn. Fr. Francisco Manuel de Zúñiga*” obispo de Ciudad Rodrigo, lo cual deberán hacer personalmente o por intermediarios, y “*le hagáis notificar no buelva a entrar en ellos sin expresa licencia*”. En febrero de 1697 se da la orden de de secuestro de los bienes del obispo “*yncurso en las temporalidades por extraño de estos reinos*”.

La situación, sin embargo, es reversible. La potestad real ha quedado a salvo y por otras vías se arregla el problema de manera que en julio se revoca el destierro y el secuestro de los bienes. Fr. Francisco Manuel de Zúñiga vuelve a su sede recibiendo el tratamiento habitual de los obispos: “*Reverendo en Xpto. Padre .... del mi Consejo*”<sup>73</sup>.

El funcionamiento de las instituciones hace claro el mecanismo de la gracia/desgracia. Como todos los obispos, el de Ciudad Rodrigo es considerado miembro nato “del mi Consejo”, aunque está claro que no es un “funcionario” de ninguno de los Consejos de la Corona<sup>74</sup>. El caso se desarrolla a través de los informes emitidos por el gobernador de Ciudad Rodrigo, dirigidos al Consejo, el cual responde haciendo todas las gestiones legales para lograr que el obispo levante las excomuniones y, después, para localizarle en Madrid, donde parece se halla refugiado, bien en la casa de la duquesa de Béjar, bien en el colegio de Dña. María de Aragón.

Esta situación es muy distinta de otras actuaciones del Consejo en las que se ordena taxativamente al corregidor de una localidad que obligue a salir de la población en el plazo de uno, dos o tres días, a alguna persona -eclesiásticos en gran parte de los casos-, y que les comine a que en el plazo de 8-10 días se presenten en la Corte ante el Consejo, porque “*así conviene a mi servicio*”. Es el ejercicio del “buen gobierno” y la “policía” de estos reinos. Al fin y al cabo el corregidor es nombrado “*mi corregidor ... entendiendo que así conviene a mi servicio y a la execución de mi justizia, paz y sossiego de esa ziuudad*”<sup>75</sup> y por ello estos documentos emanan del Consejo aunque pasan por el Registro General del Sello de la Cámara.

## 11. A modo de conclusiones.

Nada esencialmente distinto encontraríamos en otros años, al menos en los años que se han investigado siguiendo el Registro General del Sello de Castilla, entre 1694 y 1699. La Administración no ha variado en sus procedimientos para nombrar sus burócratas, aunque el órgano a quien compete esta misión haya ido conformándose lentamente y no adquiera un status diferenciado hasta la etapa de 1583-1589. Todos los reyes concedieron infinidad de gracias y mercedes, por lo que la cuestión planteada inicialmente sobre el carácter de mayor o menor generosidad en este aspecto del reinado de Carlos II, parece innecesaria. Interesa,

<sup>73</sup> AHN. Consejos, libro 7586, 11 de julio de 1696; libro 7588, octubre de 1698; libro 7589, 4 y 12 de diciembre de 1696; libro 7590, 1 de febrero de 1697 y, finalmente, libro 7593, 9 de julio de 1697.

<sup>74</sup> Pero tampoco es un cortesano, en ninguna de las dos vertientes que sintetiza Álvarez-Ossorio, no encaja bien ni en la estela de Elías, referida ante todo a las élites nobiliarias civiles, ni en la línea interpretativa “italiana” que ve al cortesano desde la óptica de Castiglione. Nuestro obispo no sabe lo que es la simulación o disimulación. Cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO., *La República de las Parentelas. El Estado de Milán en la monarquía de Carlos II*, Mantova, 2002, pp. 8-9.

<sup>75</sup> AHN. Consejos, libro 7602, 4 de febrero de 1699. Título de corregidor de Toledo a D. Alonso Pacheco, caballero de Alcántara, regidor perpetuo de Ávila. En el trabajo se recoge el nombramiento de 10 corregidores, todos con la misma fórmula en la práctica, pues las variantes son meramente de estilo.

en cambio, identificar los grandes “patronos” en cada reinado, los que pueden canalizar el uso de la gracia<sup>76</sup>.

Si algo queda en limpio de los centenares de expedientes consultados es que “Gracia y merced”, junto a palabras similares, como “dádiva, don, liberal” son las coordenadas que sitúan en su verdadero contenido otras como justicia y mérito. No se entienden enfrentándolas conceptualmente, sino integrándolas. Covarrubias nos da una vez más la clave. El modelo de “liberal” es Alejandro Magno, que no conquistaba las tierras sino para darlas “y preguntado de un amigo suyo qué le quedava, pues todo lo dava, respondió: *el gusto que tenía de dar*”, pero siempre, añade, ha de evitarse el “extremo de pródigo”. Lo cual encaja con la simbología de las “Tres Gracias”: *“están desnudas, porque lo que se da ha de ser sin cobertura ni disfraz, pretendiendo en nuestro ánimo alguna recompensa; están todas tres travadas de las manos, dando a entender que el hazer gracias, y recibirlas entre los amigos, ha de ser con perpetuidad y con una travazón indisolubles, acudiendo siempre en las ocasiones a lo que obliga la amistad”*<sup>77</sup>.

Hay reyes manirroto y otros más prudentes en administrar la gracia. Con cada rey cambian los destinatarios, pero salvo casos rarísimos, ningún rey anula las de su predecesor. El que los Reyes Católicos anularan las mercedes concedidas por Enrique IV se entiende en el contexto de guerra civil, pero debe tenerse en cuenta que ya el mismo Enrique IV había anulado previamente muchas de ellas<sup>78</sup>.

Apenas hemos tocado algunos apartados de la documentación; dejamos de lado, por ejemplo, todos los títulos de notarios, escribanos, contadores, procuradores, etc. Dejamos de lado los meramente honoríficos, a excepción de los secretarios reales, los perdones, y otros muchos. Todos estos títulos se mueven en el campo de la merced, aunque sus titulares desempeñen sus funciones en el campo del gobierno y la justicia. Esto es lo que finalmente nos queda: que la justicia, el gobierno y la gracia son las tres caras de la majestad real, de la soberanía.

<sup>76</sup> Vid H. PIZARRO LLORENTE., *Don Gaspar de Quiroga (1512-1594). Un gran patrón en la Corte de Felipe II*. Tesis doctoral inédita. UAM. 1997.

<sup>77</sup> S.de COVARRUBIAS., op. cit., pp. 653, 765.

<sup>78</sup> *Novísima Recopilación*, op. cit., lib. III, tít. V, ley IX “D. Enrique IV en Sta. María de Nieva, año 1473, pet. 3., y Lib. III, tít. V, ley X: Moderación de las mercedes y donaciones de los Reyes, y revocación de las injustas y, sobre todo, Ley XI: Modificación y declaración de las mercedes excesivas hechas por el Rey D. Enrique y por los....Reyes Católicos.